

Quaderns de Construcció de Pau

Côte d'Ivoire: retos y cuestiones pendientes un año después de Ouagadougou

Cecile Barbeito Thonon
Albert Caramés Boada
Patricia García Amado

Julio 2008



Quaderns de Construcció de Pau es una publicación de la Escola de Cultura de Pau que tiene el objetivo de difundir y acercar al público interesado las investigaciones que se llevan a cabo en esta institución en el ámbito de la construcción de la paz. Los cuadernos de investigación seguirán tres líneas de trabajo fundamentales. En primer lugar se ofrecerán documentos de análisis sobre diferentes temas de actualidad, aportando reflexiones de carácter académico. En segundo lugar se elaborarán documentos en los que se formularán propuestas que faciliten la intervención de los actores implicados en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz. Finalmente se elaborarán monográficos de análisis de conflictos armados, tensiones, procesos de paz o procesos de rehabilitación posbélica que están teniendo lugar actualmente fruto del análisis sobre el terreno del personal investigador de la Escola de Cultura de Pau.

ÍNDICE

Glosario	5
Introducción	7
Retrospectiva del Conflicto armado en Côte d'Ivoire	8
Los acuerdos de paz: de Linas-Marcoussis a Ouagadougou	9
Análisis de la coyuntura política actual en Côte d'Ivoire	10
La reconfiguración del escenario político después del APO	10
El campo presidencial: Laurent Gbagbo, el FPI y los Jeunes Patriotes.	10
Primatura y Forces Nouvelles: múltiples sensibilidades y un único liderazgo.	11
El papel de los partidos opositores: entre la cooperación y la rivalidad.	12
Organizaciones de la sociedad civil: entre el partidismo y la inacción	13
El papel de la comunidad internacional y el dilema entre liderar o apoyar el proceso de paz	13
Organismos financieros internacionales	14
Proceso electoral: el final de la crisis o el comienzo del camino.	14
Identificación de población y censo electoral	15
Instituciones electorales y coordinación	16
Organismos de control y vigilancia internacionales	16
Cuestiones por resolver: un país pendiente de reformas más profundas.	17
Desplazamiento y retorno de desplazados por el conflicto	17
Conclusiones	18
El programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración	19
Antecedentes	19
Diseño del proceso actual del DDR	20
Evolución del programa de DDR	23
Evaluación del proceso actual de DDR	24
Conclusiones	25
El proceso de reconciliación y justicia transicional	27
Violaciones de Derechos Humanos durante y después del conflicto armado	27
Violaciones de derechos humanos de civiles	27
Violaciones de derechos humanos de mujeres	27
Desconfianza interétnica	27
Utilización de mercenarios y menores soldados	28
Incitación al odio de los medios de comunicación	28
El proceso de reconciliación de la sociedad marfileña	28
Elementos facilitadores de la reconciliación	28
Políticas y prácticas de reconciliación	29
Medidas para esclarecer la verdad	29
Persecución judicial	30
Reforma institucional	31
Reparaciones a las víctimas	32
Reconciliación	33
Conclusiones	35
Conclusiones y recomendaciones	37
Bibliografía y documentos de referencia	40
Anexos	43

Glosario

AI: Amnistía Internacional
APO: Acuerdo de Paz de Ouagadougou
BBC: British Broadcasting Corporation
BCPR: Bureau for Crisis Prevention and Recovery
BAD: Banco Africano para el Desarrollo
BM: Banco Mundial
CCI: Centro de Comando Integrado
CEI: Comisión Electoral Independiente
CERAP: Centre de Recherche et d'Action pour la Paix
CICR: Comité Internacional de la Cruz y la Media Luna Roja
CNDDR: Comisión Nacional de DDR
DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración
DDM: Desarme, Desmantelamiento y Reintegración
DDHH: Derechos Humanos
DIH: Derecho Internacional Humanitario
ECHO: Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea
ECOWAS: Economic Community Of West African States
FAFN: Fuerzas Armadas de Forces Nouvelles
FANCI: Fuerzas Armadas de Côte d'Ivoire
FMI: Fondo Monetario Internacional
FPI: Front Populaire Ivoirien
FDS: Fuerzas de Defensa y de Seguridad
GTZ: Agencia de Cooperación de Alemania
HRW: Human Rights Watch
LIDHO: Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme
MFA: Mouvement des Forces pour l'Avenir
MJP: Mouvement Pour la Justice et la Paix
MPIGO: Mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest
NADER: Agencia Nacional de Desarrollo Rural
OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas
ONG: Organización No Gubernamental
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ONUCI: Misión de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire
PDCI: Parti Démocratique de la Côte d'Ivoire
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNRRC: Programa Nacional de Reinserción y Rehabilitación Comunitaria
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
RDR: Rassemblement des Démocrates Républicains
RTI: Radio Television Ivoirienne
UNFPA: Agencia de Naciones Unidas para la Población
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
USAID: Agencia de Cooperación de EEUU
UE: Unión Europea
UPCI: Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire
UTL: Université des Temps Libres

RESUMEN:

Tras los sucesivos fracasos en la implementación de los Acuerdos de Paz, el contexto actual en Côte d'Ivoire parece superar la situación de impasse. Algunos avances significativos en las disposiciones previstas en el Acuerdo Político de Ouagadougou (APO), y la voluntad del conjunto de actores de la sociedad de superar la fase armada del conflicto han generado un clima de confianza entre las partes y de presión para el avance en el proceso de paz. Aún así, el proceso electoral, el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, y el proceso de reconciliación nacional, principales aspectos regulados por los acuerdos de paz, se desarrollan con ciertas deficiencias. El presente documento analiza los principales progresos y los retos pendientes en los tres campos mencionados para el avance favorable del proceso de paz en Côte d'Ivoire.

Introducción

Tras la firma de varios acuerdos de paz, el Acuerdo Político de Ouagadougou (APO) parece ser el tratado definitivo que permitirá avanzar en el proceso de paz en Côte d'Ivoire. Este último acuerdo ha renovado el compromiso de los actores políticos marfileños y también ha dado un giro a la estrategia de la comunidad internacional, permitiendo una mayor apropiación del proceso de paz por parte del Gobierno marfileño. Esta nueva fase del proceso de paz ha generado numerosas preguntas: ¿Qué factores explican que el acuerdo de Ouagadougou sea definitivo para la implementación de los acuerdos de paz? ¿Hasta qué punto no se trata de un nuevo "reparto de pastel" de los principales contendientes? ¿Hasta qué punto da respuesta a las causas y al impacto de la violencia? ¿Cuáles son los obstáculos para la implementación de los acuerdos? ¿Qué riesgos existen en cuanto a la reunificación del país? ¿Qué papel jugarán los distintos actores políticos (Gobierno de unidad nacional, Forces Nouvelles, partidos opositores, organizaciones civiles, comunidad internacional) en la implementación de los acuerdos?

El objetivo de esta investigación es responder a todas estas preguntas, analizando los principales avances y retos pendientes; las oportunidades pero también los riesgos más significativos en tres ámbitos centrales para el proceso de paz de Côte d'Ivoire: elecciones, desarme y desmovilización, y reconciliación de la población.

Después de poner en contexto la situación en la que se encuentra actualmente el país, el presente cuaderno analizará los principales aspectos técnicos y políticos del proceso electoral como punto central del proceso de paz. A continuación, se revisará el programa de desarme, desmovilización, y reintegración (DDR) de combatientes, analizando su implementación y deficiencias. Para finalizar, se identificarán las principales características del proceso de reconciliación y del resto de ámbitos de la justicia transicional. Estos tres temas están recogidos en el Acuerdo Político de Ouagadougou (APO) y señalados como puntos esenciales para el proceso de paz. De acuerdo con los preceptos de la investigación para la paz, este documento incorpora un apartado final propositivo, en el que se efectúan recomendaciones para que el proceso de paz de Côte d'Ivoire sea lo más sólido posible y permita satisfacer las necesidades de paz de la población marfileña.

Este informe es el fruto de una investigación llevada a cabo en Côte d'Ivoire en el mes de marzo de 2008 por tres investigadores de la Escola de Cultura de Pau (Cecile Barbeito Thonon, Albert Caramés Boada y Patricia García Amado), durante la que se mantuvieron diferentes entrevistas con representantes tanto del Gobierno y la sociedad civil marfileña como de la comunidad internacional. La redacción de este informe, cuya responsabilidad sobre sus contenidos recae exclusivamente en sus autores, cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Retrospectiva del Conflicto armado en Côte d'Ivoire

Patricia García Amado

El país que fuera reconocido después de la independencia como “El Milagro Africano”, por la prosperidad y la estabilidad política que llegó a alcanzar bajo el Gobierno de partido único de Félix Houphouët-Boigny, descendió al infierno de la violencia cuando la crisis económica golpeó fuertemente los cimientos de un régimen construido sobre los grandes beneficios de la exportación del cacao. A partir de la segunda mitad de los años 80 se sucedieron las manifestaciones y las protestas que solicitaban una apertura del régimen y la aceptación del pluralismo político. De esta forma surgirán en la clandestinidad grupos políticos como el Frente Popular Marfileño (FPI) y la Unión de los Demócratas Republicanos (RDR) que en 1990 lograron su meta de aperturismo democrático.

Tras la muerte de Boigny en 1993, y con la subida al poder de su mano derecha, Henri Konan Bédié, se acentuó el sentimiento de agravio y la división de la población en torno a líneas étnicas identificadas con partidos políticos, ya que los baoulé (etnia a la que pertenecían los dos jefes de Estado que había conocido el país) eran los únicos que habían controlado el poder desde 1960. Durante el periodo de Gobierno de Bédié también creció el malestar entre los estamentos militares, que hasta entonces habían disfrutado de puestos de gran relevancia dentro del Estado, dinámica que invirtió el heredero de Boigny al proclamar que la función de los militares no eran los asuntos civiles, pasando a estar controlada la administración por personas ajenas al ejército.

Pero sin duda, la introducción de leyes discriminatorias que favorecían a los considerados nacionales, y la corriente de exaltación de la *ivoirité* que inició Bédié, sembraron las semillas del futuro conflicto. Durante este periodo aumentó la percepción estereotipada sobre las personas de origen norteamericano, generalmente de confesión musulmana y de etnias que tenían como lengua vehicular el diola (compartida con los países de la región del Alto Volta y el Sahel – Burkina Faso, Malí, Guinea), a las que se consideraba extranjeras; mientras que las personas de etnias de confesión cristiana y mayoritarias en el sur eran calificadas como auténticos marfileños. Este estereotipo, unido a la percepción de que las poblaciones del norte ocupaban tierras que no les pertenecían, inició una ola de violencia a finales de los años 90 que el Gobierno no intentó contener. Mientras en las zonas urbanas, principalmente en Abidjan, aumentaban los ataques contra

personas de origen norteamericano y sus establecimientos. Los “extranjeros” se convirtieron en el chivo expiatorio de la crisis económica que sufría el país.

La modificación del artículo 35 de la Constitución, instituyendo que para acceder al puesto de presidente el candidato debía probar la nacionalidad marfileña de ambos progenitores además de haber nacido en el país, fue un intento de Bédié de neutralizar a su principal rival en las elecciones de 1995 – el hasta entonces primer ministro originario del norte, Alassane Dramane Ouattara – que no pudo presentarse como candidato del RDR. Pero más allá de eso institucionalizó que las personas de origen no marfileño no tendrían nunca acceso al poder. En medio de esta situación de crisis política y económica, el general Robert Güei dio un golpe de Estado e instauró un Gobierno de unidad nacional al que se sumó el Front Populaire Ivoirien (FPI), del actual presidente Laurent Gbagbo, y el Rassemblement des Republicaines (RDR) de Alassane Ouattara. Sin embargo, Güei no anuló las leyes que apoyaban la *ivoirité* y las empleó en los siguientes comicios (de los que fueron excluidos Ouattara y sorprendentemente también Bédié). Las elecciones del año 2000 sin embargo, y a pesar del fraude masivo perpetrado por Güei, dieron la victoria a Laurent Gbagbo que contó con el apoyo popular, produciéndose fuertes disturbios y manifestaciones en las principales ciudades cuando Güei se atribuyó la victoria. Los resultados hechos públicos posteriormente, otorgaron la victoria a Gbagbo, lo que no evitó que fueran contestados por aquellos que no pudieron presentarse a los comicios.

La dinámica de violencia como medio para obtener el poder había comenzado en Côte d'Ivoire y el nuevo Gobierno, que inició una purga de los sectores del ejército considerados próximos al general golpista – élites militares del oeste del país – y los considerados como no leales al régimen – los militares del norte – no pudo evitar que dos años después una nueva rebelión intentara arrebatar el poder al nuevo presidente. El intento de golpe de estado fue liderado por el grupo armado del norte Movimiento Patriótico de Côte d'Ivoire (MPCI) en septiembre de 2002. Una formación que se había agrupado y entrenado en Burkina Faso aunque se desconoce el nivel de implicación del Gobierno vecino en su formación y financiación. Aunque no logró su objetivo de derrocar al Gobierno, se hizo con el control del norte del país y expuso sus principales demandas solicitando la destitución de Gbagbo, la modificación de la constitución y la celebración de elecciones inclusivas. Durante el ataque a la capital el antiguo general

golpista, Robert Guéi, fue asesinado, lo que llevó al levantamiento de los grupos armados de oposición del oeste que, según diversas informaciones, él mismo había formado y financiado: el MPIGO y el MPJ, que en noviembre de ese mismo año ocuparon las principales ciudades occidentales demandando la dimisión de Gbagbo. Los tres grupos decidirían reunificarse bajo el nombre de Forces Nouvelles.

Los acuerdos de paz: de Linas-Marcoussis a Ouagadougou

La corta duración de la fase aguda del conflicto armado ha generado que dentro del país se evite denominarlo como guerra, hablándose siempre de "la crisis". Lo cierto es que meses después del intento de tomar la capital, el MPCJ había extendido su control en todo el norte, mientras que el MPIGO y el MPJ tenían bajo su mando las regiones del noroeste. Esta situación da lugar a una división *de facto* del país que será institucionalizada con la creación de la denominada zona de seguridad en junio de 2003, patrullada por las fuerzas de la ONU, ECOWAS y las Forces Licorne.¹

Entre el 3 y el 4 de enero de ese mismo año el ministro de Exteriores francés, Dominique de Villepin, anunció que el Gobierno y las Forces Nouvelles habían alcanzado un acuerdo de alto el fuego y que iniciarían un diálogo inclusivo para lograr la paz. El 24 de febrero se firmó finalmente en Linas-Marcoussis (Francia) el acuerdo de paz, con una mesa de negociaciones en la que habían participado todas las fuerzas políticas además de la alianza armada. Los principales puntos del acuerdo serían: la indivisibilidad del país, la creación de un Gobierno de unidad nacional con representación también de los grupos armados, la elección de un primer ministro de consenso, la preparación de elecciones, la desmovilización de los combatientes y la creación de unas nuevas FFAA donde se integrasen los miembros de las Forces Nouvelles. A pesar de que todos los asistentes firmaron el acuerdo, Laurent Gbagbo se sintió traicionado por Francia que durante el intento de golpe de Estado había enviado a sus tropas para evitar el derrocamiento pero, posteriormente, dio el mismo estatus en las negociaciones al Gobierno democráticamente elegido y a los rebeldes. Igualmente, el intento de ampliar los poderes ejecutivos del primer ministro a costa de recortar los de la presidencia fue otro de los motivos por los que Laurent Gbagbo inició

su campaña en contra de los acuerdos de paz una vez llegó a su país. Los consideraba una imposición francesa y Francia les había traicionado. Pero lo cierto es que los acuerdos lograron que el campo de batalla se trasladara del enfrentamiento abierto al plano político, con algunas rupturas del alto el fuego importantes pero que no lograron reabrir el conflicto.

La falta de voluntad política, tanto por parte del presidente como por las Forces Nouvelles llevaron a un impasse que postergó las ansiadas elecciones durante años, produciéndose por lo tanto la perpetuación de Gbagbo en el poder y el inmovilismo político. De nada sirvieron los acuerdos políticos alcanzados con posterioridad para la implementación de Linas-Marcoussis (Acuerdos de Accra I, II y III, Pretoria), ni las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU apuntando nuevas estrategias para desbloquear el proceso. Diversos analistas han señalado que la falta de resolución final de la crisis se debe a los enormes beneficios que los principales actores implicados recibían del *status quo*. Mientras el Gobierno continuaba beneficiándose de su posición recibiendo los ingresos netos del petróleo y prolongando su poder de forma indefinida, el control de las principales rutas de transporte por parte de las Forces Nouvelles lograron que controlara todo el proceso de distribución de materias primas como el cacao, pero también de todo tipo de productos que pretendían salir del país por vía terrestre hacia los países colindantes.

Sin embargo, con la llegada del Acuerdo Político de Ouagadougou (APO) el 4 de marzo de 2007, se abrió una nueva ventana de esperanza para el país, hastiado de tantas promesas incumplidas y con una gran necesidad de creer en que el proceso de paz por fin se había puesto en marcha. El acuerdo logrado con la mediación del presidente burkinabés, Blaise Compaoré, materializó la propuesta del presidente marfileño, Laurent Gbagbo, de iniciar un diálogo directo con las *Forces Nouvelles* lideradas por Guillaume Soro. Las primeras conversaciones que se producían exclusivamente entre los dos principales actores del conflicto armado desde que éste se iniciara en 2002. El resultado del encuentro fue sancionado por la comunidad internacional a través de la aprobación del texto por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que dio luz verde para su implementación. Desde entonces se han producido sucesivos gestos simbólicos entre Gbagbo y Soro, que han intentado demostrar a sus conciudadanos y al resto del mundo que esta vez la paz sí será posible.

¹ Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/RES/1479 de 13/05/08, en <http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions03.html>.

Análisis de la coyuntura política actual en Côte d'Ivoire

Patricia García Amado

La reconfiguración del escenario político después del APO

Con la firma del APO se abrió una nueva etapa de reequilibrio entre las fuerzas políticas de Côte d'Ivoire. El ofrecimiento de un diálogo directo y el éxito del mismo crearon en un primer momento un nuevo balance, situando a Laurent Gbagbo y Guillaume Soro de un lado y al resto de partidos políticos opositores, que anteriormente formaban parte de la alianza G-7, del otro.² Esto se reflejó en la nueva reestructuración y en el reparto de ministerios dentro del Gobierno de unidad nacional, adjudicándose los puestos más estratégicos dentro del ejecutivo a miembros del FPI y de las Forces Nouvelles. El nombramiento de Soro como primer ministro consagró el inicio de esta nueva etapa en la historia del proceso de paz.

Aunque en un primer momento los líderes de los principales partidos de oposición (PDCI y RDR principalmente) criticaron el APO por considerarlo poco transparente, y argumentaban tener dudas sobre la existencia de un posible pacto secreto entre Gbagbo y Soro, el riesgo de que esta actitud fuera interpretada como una falta de compromiso con el proceso de paz hizo que pronto se silenciaron las críticas. Además, la existencia dentro del acuerdo de órganos de control y evaluación sobre el desarrollo del proceso en los que se incluía a representantes de ambos partidos políticos – Marco de Consulta Permanente y Comité de Evaluación y Acompañamiento – ofreció también a Ouattara y Bédié la posibilidad de incidir sobre el mismo. De igual manera, todos los partidos políticos con representación parlamentaria y el RDR (que boicoteó las últimas elecciones legislativas) se encuentran dentro de la Comisión Electoral Independiente, proporcionando a la oposición otro elemento más para el control y supervisión del proceso, a pesar de no haber participado en la negociación del APO.

Después de un año de la firma del APO es importante analizar los posibles cambios que se han producido en las estrategias de los partidos políticos, la alianza armada y la sociedad civil, visualizando también su postura ante las próximas elecciones presidenciales, además de los acuerdos y disensiones más importantes que se han producido durante este periodo. Igualmente, el papel de la comunidad internacional durante el proceso, que ha oscilado entre posiciones de fuerza y el trabajo en segundo plano, debe ser analizado para comprender su *modus operandi* actual.

² El G-7 es una alianza de los principales partidos opositores: PDCI, RDR, UPDCI y MFA; con los tres grupos armados que conforman las Forces Nouvelles: MFIGO, MPCI, MPJ.

El campo presidencial: Laurent Gbagbo, el FPI y los Jeunes Patriotes.

El artífice del diálogo directo que desembocó en la firma del APO, Laurent Gbagbo, ha sabido preservar su posición y sus intereses dentro del juego político marfileño. Desde que estalló la crisis en Côte d'Ivoire sus relaciones con la fuerza rebelde, los grupos opositores y la comunidad internacional (especialmente con Francia) han oscilado entre la presentación de estos tres actores como responsables del conflicto armado y por lo tanto enemigos del país, y la solicitud de la colaboración de todos como imprescindibles para conquistar la paz. El presidente ha permanecido impasible ante todos los intentos de los organismos internacionales, materializados en resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, para reducir sus poderes ejecutivos en virtud de desbloquear el proceso de paz.³ El que durante años fuera considerado por diversos analistas como uno de los principales obstáculos para la resolución del conflicto, se ha convertido en el principal propulsor de su solución. El APO ha devuelto las riendas del proceso a los actores marfileños, reduciendo el margen de maniobra de Naciones Unidas o por lo menos rebajando su perfil, que había sido de fuerte liderazgo hasta ese momento. Sin duda este objetivo logrado satisface las expectativas de Gbagbo, pero podría ser también un arma de doble filo: ante la incapacidad de implementar plenamente el APO, Soro y Gbagbo serían señalados como los claros culpables del fracaso y esta vez no podrán responsabilizar a la comunidad internacional de sus propios fallos.

En lo relativo a su partido, el FPI siempre ha tenido un papel estratégico en el rol jugado por el presidente. En muchas ocasiones Gbagbo ha recurrido al uso del discurso de sus colaboradores más cercanos (entre ellos su mujer Simone Gbagbo y el presidente del partido Pascal Affi N'Guessan) para difundir los mensajes más inflamatorios y mantener intachable su imagen de apertura al diálogo y la paz. Sin embargo, no hay que desestimar la influencia que tienen estas figuras dentro de las decisiones del presidente, especialmente la primera dama que es conocida

³ En reiteradas ocasiones Gbagbo se ha mostrado reacio al desarrollo de los procesos de identificación de la población, negándose a aceptar que se produzcan mientras no se lleve a cabo la desmovilización de los combatientes rebeldes. Igualmente, se ha negado a cumplir con lo estipulado en los acuerdos de paz, como la cesión de parte del poder ejecutivo a la figura del primer ministro.

por su agresiva oratoria antifrancesa y que fue acusada en un informe de la ONU de participar en la creación de escuadrones de la muerte y financiar a los grupos paramilitares durante el conflicto armado.⁴ Por su parte, las últimas afirmaciones de N'Guessan advirtiendo que su partido no permitirá que las elecciones tengan lugar hasta que las Forces Nouvelles hayan sido desarmadas y desmovilizadas por completo,⁵ pretenden mostrar la inflexibilidad del ala más dura del partido. Aunque dentro del FPI conviven diferentes sensibilidades, es difícil que las disensiones internas vayan a salir a la luz antes de las elecciones, por lo que el partido probablemente se presentará en bloque para apoyar a su máximo líder, Laurent Gbagbo.

Por último queda analizar el papel que podrían jugar los Jeunes Patriotes dentro del proceso de paz. Esta especie de milicia progubernamental que durante años apoyó al presidente Gbagbo y que promovió el uso de la violencia, cuando no la ejerció directamente, para atacar a miembros de la oposición, expulsar a los representantes de Naciones Unidas del país, así como al reducido número de nacionales franceses que permanecía en Côte d'Ivoire después del estallido de la crisis, continúa hostigando a los líderes opositores y sus seguidores. Estas actividades llevaron al Consejo de Seguridad a adoptar sanciones contra sus miembros más destacados en el año 2006, Charles Blé Goudé y Eugène Djué.⁶ Sin embargo, en mayo de 2007, dos meses después de la firma del APO, su principal líder Charles Blé Goudé fue nombrado Embajador de la Paz con la función de difundir el mensaje de reconciliación por todo el territorio marfileño. En este sentido, el lenguaje inflamatorio y las incitaciones y actos de violencia por parte de los Jeunes Patriotes se han reducido considerablemente, al igual que la financiación que recibe el grupo desde el FPI.⁷ A pesar de las sanciones establecidas, el grupo de expertos que realiza el seguimiento de su aplicación ha señalado que las dilaciones del Gobierno marfileño en fijar el monto mínimo de fondos accesibles para los sancionados complica la labor de investigación y la congelación de las cuentas de los "patriotas", tal y como establecen las sanciones impuestas. Igualmente, la falta de información en los puestos aduaneros de los países de la región sobre las personas que no tienen permiso para salir del país dificulta la plena ejecución de las mismas.

4 "Ivory Coast First Lady leads death squads, report alleged" – Washington Post, 29 enero 2005.

5 "Désaccords sur l'Accord" – *Fraternité Matin*, 2 febrero 2008.

6 Prohibición de desplazamientos fuera del territorio nacional y congelación de sus cuentas en el extranjero en virtud de la resolución 1572 del Consejo de Seguridad de la ONU del año 2004. S/RES/1572 (2006)

7 Aunque su líder Blé Goudé recibe grandes beneficios a través de su empresa de comunicación Leaders Team Associated, con numerosos encargos para cubrir eventos desde las filas presidenciales y sectores empresariales afines a Gbagbo. Información citada en *Jeune Afrique* el 30 de marzo de 2008.

Primatura y Forces Nouvelles: múltiples sensibilidades y un único liderazgo.

La llegada de Guillaume Soro al cargo de primer ministro no sólo es un acto simbólico a través del que Gbagbo reconoce a su antiguo enemigo, si no que también representa la voluntad de tener una responsabilidad compartida sobre el futuro del proceso de paz. En este sentido, las competencias de Soro son centrales para el desarrollo de los acuerdos, sobre todo en lo referente a la desmovilización de los grupos armados (tanto las Forces Nouvelles como las milicias) y el proceso de identificación (determinando al operador técnico y encargándose de la financiación del proceso). Además, con la reestructuración del Gobierno que sucedió al APO las Forces Nouvelles se adjudicaron ministerios de gran relevancia como el de Justicia, Solidaridad y Víctimas de Guerra o Comercio, además de tener la vicepresidencia de la Comisión Electoral Independiente (CEI).

A pesar de haber llegado a la cabeza del Estado, Soro no podrá mantener su puesto una vez se produzcan las elecciones. En primer lugar porque el acuerdo de Ouagadougou así lo estipula y en segundo lugar porque no cumple con los requisitos de edad mínima fijados en la constitución para presentar su candidatura a la presidencia, lo que deja la puerta abierta a las hipótesis sobre la estrategia que seguirá Soro para conservar su capacidad de influencia en el futuro del país. En sus declaraciones a la prensa ha confirmado que las Forces Nouvelles como organización no apoyarán a ninguno de los candidatos y permanecerá neutral, lo que no invalida la posibilidad de que a título personal alguno de sus miembros se posicione a favor de uno u otro partido. El primer ministro sigue negando los rumores sobre la existencia de un acuerdo para tomar el relevo de Gbagbo a la cabeza del FPI después de la próxima legislatura, y la posibilidad de que las Forces Nouvelles se transformen en un partido político. De igual manera, ha resaltado sus buenas relaciones con el RDR de Ouattara pero ha descartado formar parte de su campaña. Soro es consciente de que deberá esperar si quiere llegar a dirigir el país.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que las Forces Nouvelles no son una organización monolítica. Formada por la alianza del MPC, el MPIGO y el MJP, reúne dentro de sí misma diferentes sensibilidades y objetivos políticos no siempre compatibles y con líderes que no siempre mantienen buenas relaciones entre ellos. El intento de asesinato que el primer ministro sufrió el 29 de junio de 2007 en Bouaké puso en evidencia que no todo el mundo está de acuerdo con la distribución de poderes que estableció el APO, y quizás se puedan

producir graves disensiones internas si los mandos regionales de la alianza rebelde no se sienten suficientemente recompensados o beneficiados durante el proceso de paz. En más de una ocasión Soro ha sido acusado de autorizar purgas internas dentro de las Forces Nouvelles (concretamente de su movimiento el MPCÍ), para acabar con los partidarios de otros líderes disidentes destacados como Ibrahim Coulibaly.⁸ Entre los días 27 y 28 de diciembre de 2007 se produjeron diversas detenciones y ejecuciones sumarias dentro de las filas de las Forces Nouvelles en Bouaké, entre ellas un alto mando que fue acusado de haber colaborado en el intento de asesinato de Soro bajo las órdenes de Coulibaly. De las 27 personas que desaparecieron esos días sólo han sido hallados los cadáveres de cinco. Desde entonces se han repetido los movimientos dentro de las filas rebeldes para situar a los líderes fieles a Soro en los puestos de control.⁹ Igualmente, muchos sectores de la alianza rebelde miran a Soro con desconfianza, conocedores de su pasado y críticos con las concesiones en sus relaciones con Gbagbo juzgadas como excesivas.¹⁰

Otro de los posibles focos de tensión podría producirse por la extensión de la administración civil a todo el territorio nacional, con la consecuente recuperación del cobro de impuestos y tasas aduaneras por parte del Gobierno central, lo que dejaría a las Forces Nouvelles sin uno de sus principales medios de financiación en las zonas bajo su control. A pesar de que desde el Gobierno se anunció la reincorporación de los subprefectos a sus puestos en la zona rebelde, lo cierto es que diversas informaciones señalan que los escasos medios con los que cuentan estarían haciendo prácticamente imposible el desempeño de sus funciones y en muchas ocasiones han provocado el regreso de los funcionarios a la capital. Igualmente, y mientras los programas de DDR no se implementen de forma plena y los miembros de las FAFN reciban sus compensaciones (o salarios si se reincorporan a las FFAA) será difícil que dejen de recurrir a la extorsión para su subsistencia.

⁸ Ibrahim Coulibaly se autodefine como padre de la rebelión marfileña y acusa a Soro de haberle usurpado el puesto de liderazgo dentro de las Forces Nouvelles. En marzo de 2008 se inició un juicio no presencial contra él en Francia por el supuesto intento de financiar un nuevo golpe de Estado en su país. Ha permanecido exiliado en Benin hasta el año 2008 en el que el país de acogida le retiró el derecho de asilo por considerar que atentaba contra el desarrollo del proceso de paz en Côte d'Ivoire. Actualmente podría encontrarse en Bélgica.

⁹ Abidjan.net – *Après la révocation de Koné Zakaria / Wattao neutralise la révolte de Séguéla : Une riposte se prépare à Vavoua et à Mankono*. 20 mayo 2008. *Jeune Afrique – Retour au calme à Séguéla après le limogeage du chef rebelle*. 20 mayo 2008.

¹⁰ Guillaume Soro fue líder del sindicato estudiantil FECSI (1995 – 1998), próximo al FPI y que después formaría parte del entorno "Patriota" con su sucesor, Charles Blé Goudé (1999 – 2001).

El papel de los partidos opositores: entre la cooperación y la rivalidad.

La firma de la APO trajo un nuevo escenario ante la configuración de un nuevo Gobierno de unidad nacional y la posibilidad tangible de la celebración de las elecciones presidenciales. En esta coyuntura los principales partidos políticos, PDCI y RDR, han realizado un ejercicio de equilibrios y balances para, por una parte, apoyar la implementación de los acuerdos y desempeñar sus labores dentro del Ejecutivo y, por otra, no perder su objetivo de alcanzar la presidencia, manejándose entre la crítica y el apoyo a Gbagbo. En abril de 2008 los partidos aprobaron un código de buena conducta después de que se fijaran las elecciones para el 30 de noviembre de ese mismo año. En él se comprometían a respetar los resultados y utilizar los mecanismos contemplados en la ley para solucionar cualquier discrepancia, además de evitar la violencia y comprometerse con la transparencia de los comicios.

- *Parti Démocratique de la Côte d'Ivoire (PDCI)*

Dirigido por el sucesor del presidente de la independencia Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié (presidente del país entre 1993 y 1999) es uno de los principales dirigentes políticos que aspiran a ocupar el banco presidencial. Cuenta con sus principales apoyos en el sur pero también en algunas regiones del este del país, de donde es originario, sobre todo entre las poblaciones Akan (baoulé, agni, etc). Durante su mandato fue el principal impulsor de las políticas que apoyaban la *ivoirité*, lo que le valió la enemistad con el electorado del norte y una gran sección de las instituciones militares que vieron debilitado su poder político, entre ellos el general Robert Guéi, que perpetró un golpe de Estado acabando con la presidencia de Bédié en 1999. Dentro de su partido existen múltiples disensiones que cuestionan su cargo a la cabeza del PDCI.

En un primer momento se mostró crítico con la APO e insistió en la existencia de un pacto secreto entre sus dos signatarios, además de considerar el acuerdo como un fracaso pocos meses después de su firma y mostrar públicamente sus desavenencias tanto con el primer ministro como con el presidente, poniendo en duda la legitimidad del Gobierno. Diversos analistas han señalado que las posibilidades de lograr una victoria son limitadas y que para el PDCI sería actualmente más importante lograr posiciones en el Parlamento a través de las elecciones legislativas.

Hasta el momento, la Comisión Electoral Independiente se ha mostrado en contra de celebrar de forma conjunta las elecciones presidenciales y

legislativas, a pesar de que la asamblea nacional no funciona de manera legítima desde 2005 y que el mayor reparto de poder entre todos los grupos políticos podría contribuir a una mayor estabilidad del país en su camino hacia la paz.

- *Rassemblement des Démocrates Républicains (RDR)*

Dirigido por el que fuera primer ministro del último Gobierno de Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara, el RDR representa las aspiraciones de la población del norte que espera obtener su cuota del poder dentro del entramado político del país. Después de que su participación fuera vetada en las dos últimas elecciones presidenciales – debido a que el código electoral obliga a probar la ascendencia marfileña de los progenitores del futuro presidente –, el hecho de que nadie se haya opuesto abiertamente a la candidatura de Ouattara para 2008 es un símbolo de la voluntad de todos los grupos para concluir la crisis. Sin embargo, el voto de la población norteña no será suficiente para lograr su objetivo, por lo que deberá desplegar una intensa campaña basada en su sólida reputación como economista.¹¹ En más de una ocasión Ouattara ha formulado su deseo de contar con el apoyo de las Forces Nouvelles para su campaña, presentándose así como el bastión político del norte, sin embargo su candidatura también ha sido cuestionada de manera interna. De igual manera que el PDCI, el RDR aspira a controlar parte del Parlamento para ejercer como contrapoder en el caso de no obtener la presidencia.

Organizaciones de la sociedad civil: entre el partidismo y la inacción

La sociedad civil como tal se ha mantenido bastante al margen del proceso de paz y el acuerdo firmado en Ouagadougou no ha sido una excepción, puesto que no se considera que ningún representante de la misma esté presente en las reuniones del Marco de Consulta Permanente, ni en el Comité de Evaluación y Acompañamiento, a fin de evaluar su implementación.

Las organizaciones civiles en Côte d'Ivoire han estado siempre vinculadas en general a los partidos políticos, por lo que su criterio e independencia a la hora de hacer propuestas siempre se ha puesto en entredicho. La práctica inexistencia de movimientos articulados independientes hace difícil que la sociedad civil pueda actuar como contrapeso del poder político. No obstante podemos identificar propuestas, como la formulada por el LIDHO (Liga Marfileña por los Derechos Humanos) que,

¹¹ Fue gobernador del BCEAO y ocupó diversos puestos dentro del FMI, aunque su gestión de la crisis económica del país en los años 90, con la aplicación de severas políticas de ajuste afectaron seriamente a su popularidad.

reuniendo a más de 150 organizaciones marfileñas en febrero de 2008 configuró una carta de la sociedad civil con la finalidad de aumentar la capacidad de incidencia de todos los movimientos.

El papel de la comunidad internacional y el dilema entre liderar o apoyar el proceso de paz

Desde el inicio de la crisis la comunidad internacional ha oscilado entre un papel de liderazgo del proceso y un segundo plano de apoyo y certificación que algunos juzgan excesivamente débil. El acuerdo de Ouagadougou materializó la voluntad de la clase política marfileña de poner a los organismos internacionales a un lado y hacerse con el pleno control del proceso. Esta situación, lejos de suponer un hándicap, se transformó en una nueva oportunidad para la comunidad internacional de incidir en el proceso sin encontrarse en primera línea y, por lo tanto, evitando ser culpada del fracaso de la nueva iniciativa si ésta no prosperaba.

Sin ir más lejos, el acuerdo de Ouagadougou se desató como una reacción a la resolución 1721 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la que se pretendía dotar al primer ministro (en aquel momento Charles Konan Banny) de mayores poderes ejecutivos, mermando así las competencias presidenciales.¹² Su redacción fue vista como una injerencia en la soberanía del país y un intento de modificar la constitución en opinión de Gbagbo, que poco tiempo después ofrecería a Soro la posibilidad de entablar un diálogo directo.

De esta manera los actores internacionales, especialmente la ONUCI, habrían centrado sus estrategias después de la APO en acompañar el proceso y apoyar las iniciativas de los firmantes del acuerdo para su implementación. Los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, mostraron firmeza ante el Gobierno marfileño decidiendo qué aspectos del proceso estaban dispuestos a financiar y cuales no, señalando así la mayor o menor confianza que le merecían la gestión de ciertas estrategias de salida de crisis. Por su parte, Francia recibió con alivio la noticia del nuevo acuerdo, sobre todo en lo concerniente a la desaparición de la zona de seguridad, que le permitiría reducir el número de tropas en terreno, aunque continuaría apoyando a los cascos azules de la ONU.¹³ En las sucesivas

¹² El primer ministro dispondrá de todas las facultades necesarias y de todos los recursos financieros, materiales y humanos apropiados, así como de una autoridad total y sin trabas, conforme a las recomendaciones de la CEDEAO de 6 de octubre de 2006, y tendrá facultades para adoptar todas las decisiones necesarias, respecto de cualquier asunto de que se trate, en el Consejo de Ministros o en el Consejo de Gobierno, mediante órdenes o decretos-ley; también tendrá igualmente la autoridad necesaria sobre las fuerzas de defensa y seguridad de Côte d'Ivoire.

¹³ Francia ha sido acusada en numerosas ocasiones de excesivo inter-

resoluciones del Consejo de Seguridad se acordará mantener el Comité de sanciones y el Grupo de Expertos para seguimiento del embargo de armas y sanciones, sin embargo desaparecerá el Grupo de Trabajo Internacional y el Representante Especial para las Elecciones. Estos dos últimos cargos serán suplidos por la creación del órgano consultivo internacional que participa en las reuniones del Comité de Evaluación y Acompañamiento creado por el APO, mientras que el Representante Especial del secretario general asumiría las tareas de certificación del proceso electoral, para lo que se creó una cédula de apoyo dentro de la misión.¹⁴

A pesar de haber accedido, sin oponer ningún tipo de resistencia, al desmantelamiento de la zona de seguridad, Naciones Unidas mantendrá en vigencia el embargo de armas,¹⁵ así como las sanciones impuestas contra diversas personalidades marfileñas por sus implicaciones en la obstaculización del proceso de paz, en contra de lo solicitado por las partes en el acuerdo. Igualmente, amenazará con imponer nuevas sanciones a todas las personas que de forma deliberada atenten contra el proceso.

Organismos financieros internacionales

El papel jugado por el BM y el FMI sin embargo dista mucho del *laissez-faire* desarrollado en el último año por Naciones Unidas. Su actuación se autodefine como exigente con las autoridades marfileñas, a las que demandan una transparencia completa además del arreglo de cuentas para inyectar de nuevo dinero en el país. Al igual que la UE, el BM se ha comprometido a financiar el proceso de *audiences foraines* y de reconstrucción de censos, pero se ha negado a contribuir económicamente en el proceso de elaboración del censo nacional, y la creación y entrega de documentos de identidad, aduciendo falta de transparencia en las gestiones realizadas hasta el momento por la Primatura.

Después de que en abril de 2008 fueran liquidadas todas las deudas que el país había contraído con el Banco Africano de Desarrollo y el BM (112 millones de dólares en total), el organismo internacional decidió reiniciar su colaboración con el país y reactivar sus proyectos, lo que tendrá un coste total de 636 millones de dólares. Esta cooperación financiera, en todo caso, vendrá condicionada por el establecimiento de mecanismos de control sobre la gestión del sector del cacao y su reforma, para evitar que los fondos obtenidos de la

vencionismo. El acuerdo de paz de Linas-Marcoussis fue firmado con importante presión del Gobierno galo, lo que contribuyó a su imagen de paz impuesta y dio legitimidad al discurso anticolonialista de Gbagbo. 14 Según la Resolución 1765 del Consejo de Seguridad de la ONU (16/07/2007), y a iniciativa del Comité de Evaluación y Acompañamiento, se crea el Órgano Consultivo Internacional, integrado por el RESG, el coordinador residente del PNUD y representantes del BM, el FMI, la UE, la UA, el Banco Africano de Desarrollo, la CEDEAO y Francia. 15 Véase apartado de DDR

producción se destinen a la compra de armamento (Global Witness; 2007). La respuesta por parte del Gobierno ha sido positiva, incluso el presidente Gbagbo solicitó en octubre de 2007 la realización de una investigación en profundidad sobre las acusaciones de malversación que pesan sobre los organismos que gestionan la producción cacaotera. El intento de establecer la misma estrategia de transparencia sobre la producción petrolera (de la que se desconoce el número exacto de barriles obtenidos por día) no ha tenido el mismo éxito, y diversas fuentes argumentan que el crudo podría haberse convertido en el principal ingreso del país, sin que se tenga muy claro cómo las clases dirigentes están invirtiendo los beneficios obtenidos.

Una lectura común sobre el proceso de paz por parte de Naciones Unidas y el BM destaca que uno de los grandes retos actuales es mostrar los dividendos de la paz a la población, que hasta el momento no han percibido ningún tipo de cambio en su situación general, que sigue siendo precaria. Entre las estrategias manejadas por ambos se encuentra la de fomentar la creación de trabajo público principalmente destinado a jóvenes de riesgo,¹⁶ que a pesar de tener una escasa sostenibilidad tiene unos efectos inmediatos sobre la realidad de la población. Otras de las prioridades para el BM compartidas con otros organismos y agencias serían la formación de cuadros funcionariales cualificados, la reconstrucción de registros, el despliegue de la administración del Estado y la reinserción económica de excombatientes.¹⁷

Proceso electoral: el final de la crisis o el comienzo del camino.

El acuerdo de Ouagadougou estableció un nuevo calendario para las elecciones que permitiría su celebración antes de que concluyese 2007. Sin embargo, tal y como ocurrió con el resto de fechas estipuladas en el APO, el inicio de los procesos de identificación de la población se dilataron en el tiempo debido, en algunas ocasiones, a la falta de fondos y personal cualificado para llevarlas a cabo, pero también a las largas negociaciones entabladas para establecer el *modus operandi* o la división de tareas entre los diferentes organismos encargados de su implementación.

Para la financiación del proceso electoral Naciones Unidas creó un fondo común (*basket fund*) gestionado por PNUD al que los donantes realizan sus aportaciones y desde el que se establecen las prioridades. De esta forma la comunidad internacional, que en diversas ocasiones ha

16 Denominación que agrupa a todos esos colectivos susceptibles de ser reclutados para la actividad armada, incluyendo también a excombatientes.

17 Véase apartado de DDR

criticado la opacidad de ciertos procesos (como la elección del operador técnico para las elecciones SAGEM), posee un mecanismo más para controlar el proceso y exigir mayor transparencia.

Identificación de población y censo electoral

El proceso de identificación de la población será inspeccionado por la Comisión Nacional de Supervisión de la Identificación y se divide en tres ejes de acción:

a) *Audiences Foraines*:

En primer lugar la identificación de personas mayores de 13 años que nunca hayan sido registradas por el Estado Civil. Ésta labor sería desarrollada a través de las denominadas *audiences foraines* que se encargarían de dictar sentencia sobre la procedencia de cada individuo no registrado, en función de los datos que éste pudiera aportarles sobre la procedencia de su padres.¹⁸ Esta parte del proceso concluyó oficialmente el 15 de mayo de 2008, pero en algunos departamentos se permitió una segunda vuelta de los tribunales para recuperar a aquellos que no habían participado por falta de información. El último dato aportado por el Gobierno señala que se han emitido más de 580.000 juicios supletorios del acta de nacimiento, que una vez presentados ante las instancias judiciales pertinentes darían lugar a la tramitación del documento de identidad del individuo.

Principales dificultades del proceso:

- La falta de difusión e información fue uno de los principales puntos débiles de este ejercicio, a pesar de los esfuerzos realizados por Naciones Unidas, a través de ONUCIFM, por dar a conocer el proceso de las *audiences foraines* y las fechas en las que tendrían lugar en cada localidad del país.
- Las personas deben acudir a su localidad de nacimiento para poder presentarse ante estos tribunales. Considerando que dentro del país existen alrededor de 700.000 desplazados internos por el conflicto y que la libre circulación de personas por todo el territorio nacional sigue siendo una realidad en el papel, la posibilidad de ejercer su derecho de ciudadanía quedan limitadas.
- Sólo se registra a los mayores de trece años y por el momento no se ha definido ningún mecanismo para proceder al registro de los menores de esta edad, prolongando un problema de falta de registro de nacimiento.¹⁹
- Según datos del Norwegian Refugee Council existen alrededor de tres millones de apátridas en el país que, habiendo nacido en Côte d'Ivoire, no tienen derecho a ser considerados como nacionales

porque sus progenitores son extranjeros, tal y como se estipula en las condiciones para acceder a la nacionalidad. Este derecho tampoco les es reconocido en muchas ocasiones en el país de origen de sus padres, puesto que no han nacido allí. De esta forma se perpetuará la desigualdad y la falta de acceso a derechos de una parte importante de la población, una de las causas principales del conflicto.

b) *Reconstrucción de registros*:

Durante el conflicto armado muchos registros fueron saqueados e incendiados cuando las Forces Nouvelles intentaban expulsar a los representantes del Gobierno de las zonas bajo su control. De igual manera, muchas personas perdieron sus documentos de identidad durante la crisis debido a que fueron requisados por las autoridades o destruidos por estas mismas con la finalidad de privar a sus dueños del reconocimiento de su nacionalidad. Uno de los grandes objetivos sería, por lo tanto, reconstruir estos registros. Pero, a pesar de existir una gran cantidad de fondos destinados a este fin (provenientes de la UE y el BM principalmente), no se ha estipulado la manera en la que esta reconstrucción será llevada a cabo, a parte de la creación de comisiones de reconstrucción en cada subprefectura y en las comunas de Abidjan que deberán realizar su trabajo en el periodo de cuatro meses. El coste estimado de la operación es de 53,6 millones de euros.

c) *Identificación ordinaria*:

A través de la que se entregarán los documentos nacionales de identidad a todas las personas que tengan un acta de nacimiento, un certificado de nacionalidad o un juicio supletorio; y un documento identificativo a las personas extranjeras que puedan igualmente acreditar su lugar de nacimiento. Asimismo, serán renovados aquellos documentos que se hayan caducado. El proceso de identificación de la población lo llevará a cabo SAGEM, el operador técnico francés seleccionado por la Primatura y aprobado por el Consejo de Ministros.

Principales dificultades del proceso:

- El retraso que ha sufrido el proceso debido a las prolongadas negociaciones entre SAGEM y el primer ministro para fijar la cuantía del proceso de identificación, finalmente fijada en 119 millones de euros, cuya financiación dependerá exclusivamente de las autoridades marfileñas. Los principales donantes se han negado a financiar esta operación porque consideran que el proceso de elección del operador técnico

¹⁸ Para más información sobre los requisitos, consultar <<http://www.audiencesforaines.gouv.ci/>>.

¹⁹ Observaciones presentadas por UNICEF.

no ha sido suficientemente transparente y que la cuantía supera lo estimado previamente, multiplicando por cuatro el coste calculado por la UE para dicho proceso.²⁰

- El tiempo estipulado por el SAGEM para llevar a cabo todo el proceso de identificación (ocho meses), que se inició en mayo de 2008, no se ajusta a la fecha establecida para los comicios, 30 de noviembre del mismo año, por lo que obligará a retrasar aun más las elecciones.
- La institución encargada de la confección y entrega de los nuevos documentos es la Oficina Nacional de Identificación, cuya implantación en el territorio nacional es verdaderamente deficitaria (la capital del norte, Bouaké, carece de una) lo que ralentizará gravemente la obtención de los documentos a menos que se permita a otras instituciones realizar esta tarea.

Instituciones electorales y coordinación

En efecto, el acuerdo de Ouagadougou establece que la Comisión Electoral Independiente (CEI) será la encargada de liderar el proceso que conduzca a la celebración de los comicios. Dentro de la CEI se encuentra la Comisión Central compuesta por representantes de todos los partidos políticos y las Forces Nouvelles, con un total de 31 miembros, lo que a veces pone en duda no sólo su independencia si no su operatividad. Las decisiones se adoptan por mayoría simple por los doce miembros que componen la Oficina de la Comisión Central dentro de este órgano, que son los representantes de los partes firmantes del acuerdo de Linas-Marcoussis (10) además de un representante de la Presidencia y otro de la Asamblea Nacional.

El proceso ha sufrido un grave retraso ya que hubo que esperar más de un año desde la firma del APO para que el consejo de ministros aprobara un decreto que delimitaba las competencias del operador técnico (SAGEM) y el Instituto Nacional de Estadística (INS), organismos que dependen del CEI y que deben encargarse de la misma labor dentro del proceso electoral: realizar la inscripción de votantes en la lista electoral y elaborar las tarjetas electorales.²¹ El decreto, aprobado el 13 de abril, delimita las competencias de ambos organismos – por una parte SAGEM se encargará de proporcionar los medios tecnológicos y dirigir la operación; mientras el INS pondrá a disposición su base de datos (lista electoral del año 2000) y supervisará el trabajo de SAGEM –. Para responder a la pregunta sobre por qué esta bicefalia cabe fijarse en quién controla cada uno de estos organismos. A pesar de ser considerados

como neutrales, la empresa francesa SAGEM fue elegida por el primer ministro (Forces Nouvelles), mientras que los cargos más relevantes dentro del INS están ocupados por miembros del FPI y personalidades próximas a Gbagbo. De esta manera, ambas partes han dejado constancia de que todavía persiste una cierta desconfianza mutua y que, por lo tanto, quieren tener control directo sobre la composición de la lista electoral, aunque finalmente será la CEI la encargada de aprobarla.

La finalidad es crear una lista electoral única tomando como base la última realizada para las elecciones presidenciales del año 2000. A esta se añadirán los electores que deben inscribirse presentando un acta de nacimiento o un juicio supletorio en los comités electorales de su localidad. Una vez diseñada, las personas inscritas podrán votar presentando la tarjeta electoral (remitida por la CEI) o el documento de identidad, que tienen un mismo número de serie para evitar duplicaciones.

Organismos de control y vigilancia internacionales

La anulación del cargo del Alto Representante del Secretario General para las Elecciones en julio de 2007 accediendo a las peticiones de Laurent Gbagbo, que había criticado la interferencia de la persona que ocupaba este cargo en asuntos internos del Estado, sembró las dudas sobre la capacidad de Naciones Unidas para realizar las tareas de observación y certificación de los próximos comicios.

Las funciones del Alto Representante serían asumidas por el Representante Especial del Secretario General, que en marzo de 2008 definió cinco criterios encaminados a certificar el desarrollo y el resultado de las elecciones presidenciales que fueron aprobados por el Comité de Evaluación y Seguimiento del APO.²² Igualmente, se creó una cédula de apoyo a la labor de certificación dentro de ONUCI con la que se espera poder recabar información sobre todos los posibles incumplimientos de estos cinco criterios y evaluar de esta manera si el proceso electoral y las elecciones cumplen los requisitos mínimos para ser dados por válidos.

²² Estos cinco criterios son: en primer lugar, que las elecciones tengan lugar en un clima de paz y sin violencia; en segundo lugar, que todos los candidatos tengan acceso a los medios de comunicación públicos de forma igualitaria; tercero, que el proceso sea inclusivo, que puedan presentarse todos los candidatos y que todos los grupos de población puedan ejercer su derecho a voto; cuarto, que la lista electoral sea completa y cuente con el visto bueno de todos los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil; y por último, que el escrutinio sea llevado a cabo con la participación de observadores internacionales que aseguren la transparencia del proceso.

²⁰ Entrevista a Harborne, B.

²¹ Según la ley sobre la CEI aprobada el 21 de julio de 2005 estas tareas correspondían de forma exclusiva al INS. El decreto sobre el reparto de competencias fue aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de abril de 2008.

Cuestiones por resolver: un país pendiente de reformas más profundas.

El acuerdo de Ouagadougou definió por lo tanto las prioridades de actuación para iniciar una salida de la crisis: identificación de la población, elecciones y desarme y reintegración. A pesar de la gran trascendencia de las decisiones tomadas, cabría cuestionar hasta que punto éstas logran responder a las causas principales del conflicto de manera que eviten que la violencia vuelva a brotar en el país.

Si bien es cierto que la nacionalidad se encuentra dentro del eje principal de la violencia, el proceso de identificación por sí solo, tal y como se encuentra formulado en la actualidad, sigue dejando a personas nacidas en el país, aquellas con progenitores extranjeros, sin poder alcanzar su derecho a estar adscrito a una nación. Las estructuras que generan esta desigualdad – las leyes en las que se fundamenta el concepto de *ivoirité*: la ley de propiedad agraria, el código electoral y la constitución principalmente – permanecen intactas sin que por el momento exista una pretensión de modificarlas. El reasentamiento de desplazados, la propiedad agrícola, los derechos de ciudadanía y la libre circulación de bienes y personas son algunos de los retos que permanecen en Côte d'Ivoire.

En la época poscolonial de máximo esplendor del país, el presidente Félix Houphouët-Boigny sentenciaba que la tierra era de aquel que la trabajaba. De esta forma los inmigrantes, que acudieron al país llamados por las grandes posibilidades que ofrecía trabajar en el sector del cacao, tuvieron acceso a tierras para el cultivo cedidas a cambio de su trabajo en las plantaciones de las familias autóctonas,²³ que necesitaban urgentemente mano de obra después de que los más jóvenes dejaran el campo buscando mejores oportunidades en la ciudad. Con la crisis que se inició a mediados de los años 80 y que se agudizó en los 90 muchas personas intentaron regresar a sus tierras, que ya estaban siendo cultivadas por la población inmigrante, de manera que surgieron las primeras disputas, principalmente en el oeste. De esta forma, desde que estalló el conflicto en 2001, un gran número de personas fueron desplazadas en la zona occidental del país por aquellos que reclamaban la devolución de sus tierras, produciéndose una escalada del conflicto entre comunidades que se consideraban autóctonas y aquellas consideradas como extranjeras. Si el APO no crea ninguna vía para que los nacidos en Côte d'Ivoire con ascendencia extranjera puedan recuperar el derecho a trabajar y vivir

en las tierras que han cultivado durante tres o cuatro décadas, se dejará de nuevo una puerta abierta al conflicto, sin mencionar los posibles efectos que la regularización de la propiedad de la tierra podría tener sobre la producción nacional.

La ley de propiedad agraria, aprobada en 1998, estipula que sólo los nacionales marfileños pueden tener titularidad sobre la tierra. Se establece una demora de 10 años para obtener un certificado de tierras y tres más para registrar legalmente la propiedad de los terrenos, después de los cuales los no registrados pasarán a formar parte de la propiedad del Estado. Los extranjeros sólo podrán acceder a la tierra a través de contratos de arrendamiento a partir del 2011. Esta ley se encuentra en suspenso y sin aplicación debido a la situación del país, pero son muchos los marfileños que reclaman que sea puesta en vigencia, lo cual afectaría gravemente a los descendientes de inmigrantes que durante los últimos 30 años han estado cultivando estas tierras y haciéndolas productivas.

Desplazamiento y retorno de desplazados por el conflicto

El espacio dedicado dentro del APO al retorno de los desplazados por el conflicto es escaso, limitándose a identificar al órgano responsable de diseñar un programa de ayuda al retorno voluntario, que en este caso sería el Ministerio de Solidaridad y de las Víctimas de la Guerra. El programa, diseñado en 2006 pero aun no implementado, señala que los beneficiarios serán no sólo los desplazados que deciden retornar, si no también las comunidades de acogida, refiriéndose a las localidades de origen. Esta especificación ofrece una imagen de las dificultades que pueden presentarse a la hora de reintegrar a las personas desplazadas en los lugares de donde fueron expulsados por sus propios vecinos, principalmente en las regiones del oeste. Las disputas sobre la tierra y su propiedad hacen que los retornados no sean bien recibidos y que en muchas ocasiones se vean forzados a permanecer en las inmediaciones de las comunidades con unas condiciones de vida que en ocasiones no alcanzan la subsistencia.

Todavía existen más de 700.000 personas desplazadas dentro del país. Según datos facilitados por OCHA y CICR decenas de miles de personas han iniciado un proceso de retorno, de forma voluntaria y sin asistencia institucional, desde la firma del APO. Sin embargo, la deficitaria situación humanitaria y la falta de seguridad han hecho imposible que los desplazados puedan recuperar sus tierras y sus hogares.

En este sentido, el modo operativo de las *audiences foraines* no ha tenido en cuenta las necesidades de

²³ Esta práctica es conocida como *tutorat* y forma parte de las normas consuetudinarias respetadas en el país aunque no es reconocida por ninguna ley formal.

los desplazados internos en el país, al exigir que los trámites para la identificación se realicen en la localidad de nacimiento del solicitante. La situación actual de Côte d'Ivoire, en la que las principales rutas de comunicación están plagadas de controles militares – tanto en el norte como en el sur – donde el primer requisito para franquearlas es mostrar un documento de identidad o de lo contrario pagar una multa por dicha infracción (de la que no se obtiene ningún recibo y cuya cuantía está sujeta a la libre consideración del militar de turno), hace prácticamente imposible para un desplazado indocumentado presentar su solicitud en su lugar de origen. Y es que, a pesar de que el APO concede especial importancia a la restauración de la libre circulación de bienes y personas por todo el territorio, la mera eliminación de la zona de confianza que separaba el norte del sur no ha sido en ningún caso suficiente para reestablecer la libertad cuando el cobro de tasas, multas e impuestos de dudosa legalidad sigue siendo una de las principales fuentes de financiación tanto de las FANCI como de las FAFN.

De igual manera, la falta de instituciones judiciales en el norte y el oeste del país señalan que otro de los objetivos del APO, el despliegue de la administración civil por todo el territorio, sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de que el Gobierno anunció el retorno a sus puestos de los prefectos y subprefectos en gran parte del país, la mayoría de ellos han visto imposible realizar su trabajo debido a la ausencia de medios y a las reticencias de las Forces Nouvelles a la hora de retornar el poder a las instituciones civiles del Estado. Esta situación ha afectado también gravemente a los desplazados que no pueden acceder a procedimientos judiciales para reclamar sus propiedades, bien por desconocimiento de la legislación o bien por la ausencia total de cuerpos jurídicos en sus localidades.

Conclusiones

La celebración de las elecciones no debe ser vista como un fin en sí mismo, si no como el comienzo de un largo camino hacia la reconstrucción del país y la reconciliación. Sin embargo, el requisito de que los comicios se celebren de forma transparente y

libre, y que los resultados sean aceptados por todas las partes (partidos políticos, Forces Nouvelles, milicias, población en general) es indispensable para que los cimientos de la construcción de paz sean sólidos. El futuro Gobierno legítimo será el responsable de crear e implementar el programa para la salida definitiva de la crisis, por lo que tendrá que contar con el apoyo de todos los sectores políticos, que deben implicarse en la reconstrucción del país, así como de los sectores económicos y sociales más destacados, pero principalmente con el respaldo de la población civil. Por esta razón es necesario que se creen los canales y mecanismos necesarios para hacer a la población civil partícipe del proceso, que cuenten con información directa y fiable sobre todas las iniciativas emprendidas por sus gobernantes para evitar que la paz sea vista como un nuevo reparto de poder entre los poderosos. En este sentido, las iniciativas destinadas a hacer visibles los dividendos de la paz de forma inmediata a la población serán claves para asegurarse su apoyo al proceso y su implicación en los logros.

La estabilización económica del país debe estar unida a una mayor transparencia de las cuentas del Estado y a la eliminación de las prácticas corruptas y las redes clientelares que hasta ahora han regido la política marfileña. Del mismo modo, necesitará de la institución de un Ejecutivo que gobierne para todos y no sólo para aquellos que le han ofrecido su voto, ni mucho menos para aquellos con los que comparte ascendencia étnica. En este sentido, las elecciones legislativas serán necesarias para reflejar la pluralidad del país en la Asamblea General, pero también lo será que la clase política se comprometa de forma plena con el futuro del país.

Finalmente, lograr una ley agraria inclusiva será uno de los grandes retos del próximo Gobierno, ya que la actual regulación de la propiedad (aunque todavía no se ha llegado a implementar) podría dar lugar a nuevos enfrentamientos, principalmente en el oeste, entre las etnias consideradas extranjeras y las locales. Esta realidad debe enfocarse también desde la ampliación de los criterios para conseguir la nacionalidad marfileña, o la posibilidad de que se abra un proceso extraordinario de naturalización que acabe con la exclusión de todos aquellos que, aun habiendo nacido en el país, siguen siendo considerados como extranjeros.

El Programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración

Albert Caramés Boada

La seguridad es uno de los ejes iniciales que se labordan en los contextos de construcción de paz y al inicio de la fase de rehabilitación posbélica. En relación a esto, una de las premisas iniciales que aparece en el APO es la necesidad de estabilizar la situación de seguridad para así poder llevar a cabo los sucesivos procesos de identificación de la población y la realización de las elecciones presidenciales para iniciar el proceso de salida de la crisis. Tal y como se concibe en este acuerdo, esta estabilización pasa por una reforma del sector de seguridad, la cual afecta tanto a las FANCI como al grupo armado de oposición FAFN, a través de un nuevo proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de excombatientes,²⁴ así como un proceso de desarme y desmantelamiento de las milicias (DDM) ubicadas al oeste del país.

El presente apartado pretende realizar un análisis global del proceso de DDR que se ha llevado a cabo en Côte d'Ivoire, previamente a la firma del APO, con el objetivo de identificar las principales lecciones aprendidas, así como un análisis del diseño y evolución del programa actual. A modo de conclusión se realizará una evaluación del actual proceso, además de hacer una valoración de cómo debería darse la reforma del sector de la seguridad.

Antecedentes

A pesar de que el conflicto se dio por finalizado en 2003 y que el primer acuerdo de paz, el de Linas-Marcoussis, se firmó ese mismo año, el programa de DDR se ha pospuesto varias veces por las desavenencias políticas entre las partes firmantes. Los motivos que han llevado a su sucesiva paralización se explican por el hecho de que, dentro de este proceso, el programa de DDR se diseñó conjuntamente con el de la identificación de la población, de manera que tuvieran que realizarse de forma sincronizada. Mientras que el FPI exigía el desarme completo de las FAFN previo a las elecciones, las Forces Nouvelles se resistían a entregar sus armas hasta comprobar que las elecciones cumplen con las garantías de transparencia y de participación. Posteriormente,

²⁴ Por programa de DDR se puede entender como el proceso que contribuye a la seguridad y estabilidad en contextos de recuperación posbélica a través de la eliminación de las armas a manos de los combatientes, sacando los combatientes de las estructuras militares y ayudándoles a reintegrarse social y económicamente en la sociedad buscándoles modos de vida civiles (Naciones Unidas, 2006). Este programa forma parte de unos compromisos más amplios negociados en el proceso de paz (justicia, reforma del sistema policial, reestructuración de las FFAA, elecciones, cambio político, etc.). Por tanto, el DDR ha de ser un componente de una estrategia más amplia de construcción de paz.

otro motivo de paralización del proceso hay que buscarlo en el rechazo de las FANCI a integrarse dentro de un mismo ejército con las FAFN.

Más concretamente, tras el Acuerdo de Linas-Marcoussis, tanto las FANCI como los grupos armados de oposición iniciaron el proceso de DDR desmantelando algunos puestos de control y entregando parte de su artillería pesada, pero persistieron las discrepancias entre el Gobierno y Naciones Unidas sobre el coste económico total del programa. Tras un nuevo periodo de negociaciones para intentar desencallar el proceso,²⁵ las conversaciones se suspendieron por la exigencia de las FAFN de que primero se desarmaran las milicias al oeste del país como condición para iniciar el proceso de DDR con sus combatientes. Tras esta tentativa fallida se concertó un nuevo calendario, aunque se mantuvo la incertidumbre de cómo hacer frente a la exigencia del pago de unos 960 dólares para la reintegración de una buena parte de excombatientes, por lo que tuvo que ser pospuesto de nuevo.

Ya a finales de julio de 2006, las milicias progubernamentales situadas al suroeste del país pidieron que se tuviera en cuenta y recompensara a aquellos que habían defendido la República, ya fuera a través de asistencia a las víctimas como por el apoyo logístico, como condiciones para poder entregar sus armas. Dicho proceso también fue suspendido semanas después por el bajo porcentaje de armas recogidas respecto el número de combatientes desmovilizados.²⁶ A día de hoy, la ONUCI ha identificado diversos tipos de milicias completando una cifra total cercana a los 5.600 efectivos (UPRGO, FLGO, MILOCI, APWè, LIMA FS y COJEP). Sus características son muy heterogéneas, ya sea por su localización en la región, el número de efectivos o el tipo de armamento. Entre ellas se puede encontrar ciertos grupos de auto-defensa que han aparecido progresivamente en respuesta del conflicto armado en Liberia, aunque también otros grupos donde su nivel de armamento y entrenamiento se desconoce.

Sin embargo, debe destacarse las iniciativas que sí se han implementado, como la desmovilización de los menores soldados. En líneas generales, por tratarse de un colectivo en situación de vulnerabilidad, en la redacción/elaboración de los acuerdos de

²⁵ Inicialmente, el programa de DDR debía producirse entre el 14 de mayo y el 31 de julio de 2005.

²⁶ Hasta ese momento, se habían desmovilizado 981 combatientes, y solo 110 armas y 6.975 rondas de munición entregadas, con un pago en metálico de 970 dólares en tres meses para la ayuda en la reintegración.

paz deberían reconocerse los derechos de los menores soldados, basados en una desmovilización prioritaria, así como a prestaciones y derechos especiales (Escola de Cultura de Pau: 2008). En el caso marfileño, a través de contactos con los Jefes de Estado Mayor de las FFAA gubernamentales, el general Philippe Mangou, y de las FAFN, el general Soumaïla Bakayoko, se firmaron sendos planes de acción bajo el compromiso de no enrolar a más menores en sus filas. A través de intervenciones de reagrupamiento familiar, se calculó la presencia de entre 3.000 y 4.000 menores soldados tras el fin del conflicto armado, de los que 2.800 fueron acogidos en los programas llevados a cabo por UNICEF. De éstos 2.800, 1.300 procedían de las FAFN, además de identificarse unas 1.000 niñas.

Respecto a la desmovilización de menores soldados, 1.300 de éstos se encuentran en la fase de escolarización formal, mientras que los otros 1.500 se dedican a la formación profesional (unos 930 en aprendizaje en el sector informal y cerca de 600 en aprendizaje en el sector agrícola), en colaboración con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (NADER, por sus siglas en francés). Más concretamente, las actividades previstas para este colectivo han sido las actividades de sensibilización en las comunidades (o sensibilización de proximidad) acerca de la protección de la infancia y los peligros que supone su presencia en el seno de los grupos armados; la realización de tareas de *advocacy* hacia el CCI para tener en cuenta los deseos y necesidades de los menores; la puesta en marcha de la ya mencionada comisión técnica de apoyo y verificación; el apoyo económico y material; el refuerzo de las capacidades locales (ONG) y las tareas psicosociales, socio-profesionales, médicas y escolares.²⁷ Además en 2006, bajo el marco del *Child Protection Forum* se inició un Comité de Verificación del estatus de los menores soldados, conformado por HCR, CICR (a modo de observador), *Save the Children*, OCHA, ONUCI y UNICEF.²⁸ Actualmente no se descarta que se pueda seguir identificando menores soldados en los próximos reagrupamientos, a pesar de declararse oficialmente que ya no se van a hallar más en futuras desmovilizaciones.

Diseño del proceso actual de DDR

A cerca del programa de DDR, el APO especificaba la necesidad de seguir las recomendaciones mencionadas por el Acuerdo de Linas-Marcoussis en cuanto a la creación de un Plan Conjunto de Operaciones sobre DDR, la implementación de un Programa Nacional de DDR y la aceleración

del proceso de desarme y desmantelamiento de las milicias (DDM) ubicadas al oeste del país. En diciembre de 2007 se aprobaron tres nuevos acuerdos políticos que complementaban lo establecido en el APO y en los que se confirmó la creación de este centro de operaciones conjunto bajo la figura del Centro de Comando Integrado (CCI). El CCI estaría bajo la responsabilidad de la oficina del primer ministro, comandado por el Jefe del Estado Mayor de las FFAA estatales y el de las Forces Nouvelles (FAFN), para llevar a cabo las tareas de desarme y desmovilización. Los objetivos principales del CCI consisten en la el diseño de una política de defensa y seguridad, la puesta en marcha del Programa Nacional de DDR, la formación de unas nuevas Fuerzas de Defensa y de Seguridad (FDS) y la protección y la libre circulación de las personas por todo el territorio nacional.

Sobre el número de participantes susceptibles de acogerse al programa, las estimaciones realizadas giran en torno a la necesidad de desmovilizar a unos 35.000 efectivos de las FAFN (5.000 para las nuevas FDS, 6.000 para el Programa Nacional de Reinserción y Rehabilitación Comunitaria [PNRRC], 20.000 al servicio cívico y 4.000 para las fuerzas policiales) y 5.000 de las antiguas FANCI (ICG: 2008). No obstante, diversos observadores internacionales aseguran que el número total de efectivos de las FAFN no llegaba a superar los 8.000 o 10.000 efectivos, por lo que los efectivos restantes para llegar a sumar la cifra indicada eran allegados y acompañantes de estas fuerzas, pero no combatientes (ICG: 2008).

Uno de los puntos primordiales a tener en cuenta desde el principio para la implementación de un programa de DDR es la identificación de los participantes, que reciben asistencia directa, y beneficiarios, que reciben beneficios de manera indirecta. Es por ello que en los acuerdos de paz se establece qué grupos armados deben ser desmovilizados, aunque, de una manera más concreta, deben establecerse los criterios de elegibilidad transparentes, fáciles de entender y no ambiguos para evitar percepciones de favoritismo o victimización (Escola de Cultura de Pau: 2008). Como condición para acogerse al proceso marfileño, según lo acordado en el APO, debían de haber sido reclutados por las FANCI o por FAFN tras el 19 de septiembre de 2002, fecha oficial del estallido del conflicto. Tampoco debe obviarse que en el APO las partes firmantes se comprometieron a establecer una nueva ley de amnistía que abarcase el periodo entre el estallido del conflicto y la fecha de entrada en vigor de dicho acuerdo. El ofrecimiento de amnistía es una de las prácticas más frecuentes en los programas de DDR, para facilitar la aceptación del desarme por parte de los

²⁷ Entrevista a Harborne, B.
²⁸ Ibid.

combatientes, fomentando en muchas ocasiones la impunidad y evitando el desarrollo de mecanismos de justicia transicional efectivos que castiguen los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto.²⁹

Las áreas de acción del CCI se centran en las fases de desarme y desmovilización, tanto para las FFAA regulares y los miembros de las FAFN, como para el proceso de DDM de las milicias progubernamentales ubicadas al oeste del país. A diferencia de los procesos anteriormente diseñados, con un periodo de acantonamiento muy prolongado, se contemplaba que estas dos fases tuvieran una duración máxima de 10 días, siete para el desarme (donde se procede al reconocimiento médico y psicológico, la identificación de los excombatientes y el registro y la recolección de las armas) y tres más para la desmovilización (centrados básicamente en los servicios de información y orientación a los ex combatientes). Será el PNRRC el encargado de elaborar los perfiles de los ex combatientes. A diferencia de otros programas de DDR actualmente en funcionamiento, se observa como se trata de un periodo corto de tiempo, principalmente basado en criterios realistas: resulta difícil intentar retener a excombatientes que finalizaron el conflicto cinco años atrás, además de que en el caso de las antiguas FANCI se trataba de un proceso de acuartelamiento. En todo caso, será la fase de reintegración la que ofrecerá mayores retos y, por lo tanto, un periodo más prolongado de tiempo.

Son seis los centros de reagrupamiento que se han dispuesto en la zona bajo control de las FANCI (Abidjan, Bondoukrou, Daloa, Guiglo, San Pedro y Yamoussoukro), diferenciando entre las zonas de reagrupamiento, las de desarme y las de desmovilización. Por su parte, en el norte se han dispuesto seis centros más, de los que tres (Bouaké, Korhogo y Man) fueron rehabilitados y entregados por la ONUCI a mediados de marzo de 2008 (ONUIC, 2008). Se estima que el reagrupamiento de las FAFN abracará a un total de 34.678 efectivos y tendrá una duración total de cinco meses y medio (hasta mediados de octubre de 2008) en las cuatro áreas principales identificadas: Bouaké y Seguela; Katiola y Mankono; Man, Toubá y Odienne; y Korhogo, Bouna y Boundiali.

Para la implementación de la fase de reintegración de los excombatientes que no hayan pasado a formar parte de las nuevas FFAA se creó el PNRRC, también

bajo la responsabilidad de la oficina del primer ministro.³⁰ Este organismo persigue el objetivo general de "contribuir a la restauración de un clima de seguridad y de paz a través de la asistencia y refuerzo de las capacidades de los excombatientes, jóvenes en situación de riesgo y de las poblaciones en situación de crisis, para que así pasen a ser sujetos de desarrollo" (PNRRC: 2008). Más concretamente, los objetivos específicos son los siguientes:

- Reinserción social y reintegración económica de los excombatientes desmovilizados.
- Rehabilitación de las infraestructuras comunitarias en las zonas afectadas por el conflicto.
- Rehabilitación de las capacidades organizacionales en las comunidades afectadas por la guerra.
- Restauración de las capacidades de producción de la población.
- Acceso de los grupos vulnerables a los servicios económicos y sociales de base.
- Reintegración de los menores asociados con el conflicto a sus familias y a la educación básica.
- Construcción y consolidación de la cohesión social.

Las actividades previstas se realizarán a través de tres células (la Célula de Apoyo, la Célula de Reinserción y la Célula de Rehabilitación Comunitaria), y se distribuirán en 19 oficinas regionales. Más concretamente, se han fijado tres líneas de proyectos: la reinserción social, la reintegración económica y la rehabilitación comunitaria.

Respecto la **reinserción social**, entendida como la fase transitoria entre la desmovilización y la reintegración, esta se basa en la asistencia necesaria en el plano psicológico y social para facilitar la integración social y económica. Las principales actividades de esta línea de proyectos son la organización de centros de tránsito y de orientación para un número limitado de menores asociados a grupos armados (tanto regulares como irregulares), el registro en la oficina regional, la provisión de consejos de orientación, el apoyo médico y psicológico y el apoyo al reasentamiento para llevar a cabo acciones de sensibilización a través de las autoridades locales. En comparación con otros programas de DDR que se desarrollan en la actualidad, se observa como las actividades diseñadas en esta fase guardan especial similitud con las diseñadas en la desmovilización, por lo que resultará necesario evitar que se produzca una duplicación. Cabe reseñar que las actividades se centran en las necesidades de los ex combatientes, a través del establecimiento de su perfil socioeconómico. En definitiva, la ausencia de estudios socioeconómicos acerca de las regiones donde los ex combatientes pretenden reintegrarse, que sirvan para identificar las necesidades de la

²⁹ Por justicia transicional se entiende como los procesos judiciales y extrajudiciales que facilitan y permiten la transición de un régimen autoritario a una democracia o de una situación de guerra a una de paz. La justicia transicional busca aclarar la identidad y los destinos de las víctimas y los responsables de violaciones de derechos humanos, establecer los hechos relacionados con dichas vulneraciones y diseñar las formas en las que una sociedad abordará los crímenes perpetrados y las necesidades de reparación (Rettberg, 2004).

³⁰ Entrevista a Malan, J.

comunidad, puede derivar en nuevos focos de inseguridad y resentimiento entre las comunidades de acogida (Escola de Cultura de Pau, 2008).

Por otra parte, la **reintegración económica** busca permitir a los grupos objetivo el desarrollo de sus capacidades, así como la realización de actividades económicas que permitan su propio sustento. Ésta se subdivide en varios ejes de intervención: la reintegración de una parte de los excombatientes desmovilizados a sus actividades iniciales o la promoción de actividades para el autoempleo; la formación en distintos ámbitos y en función de sus necesidades (alfabetización, formación profesional, formación en gestión, etc.); la localización de desmovilizados cualificados en empleos ya existentes; la firma de acuerdos de partenariado con sistemas de financiación ya existentes (microcréditos, proyectos productivos, etc.); la puesta en marcha de sistemas de acompañamiento y evaluación de las actividades de los desmovilizados beneficiados; y el apoyo a la creación de actividades generadoras de ingresos. Por todo ello, previamente se deberán realizar políticas sectoriales de desarrollo como la rehabilitación de infraestructuras, el apoyo a la producción y comercialización de productos agrícolas o el apoyo a las pequeñas empresas, entre otros aspectos.

Finalmente, el eje de la **rehabilitación comunitaria** se concibe como un programa de urgencia a favor de las comunidades más desfavorecidas por la crisis, tanto de los excombatientes como de los desplazados internos. Pretende la rehabilitación de las infraestructuras sociales, la puesta en marcha de las actividades generadoras de ingresos, la restauración de la cohesión social y la formación en métodos participativos. En esta rehabilitación, los colectivos que recibirán asistencia serán la población desplazada que retorna a sus regiones originales, así como la población afectada por la crisis, las comunidades que hayan sufrido una mayor tasa de desplazados y los grupos en situación de mayor

vulnerabilidad (mujeres, menores, discapacitados, viudos/as y huérfanos/as). La metodología empleada para la planificación de estos proyectos se prevé que sea participativa, de manera que la población identifique sus necesidades a nivel comunitario.

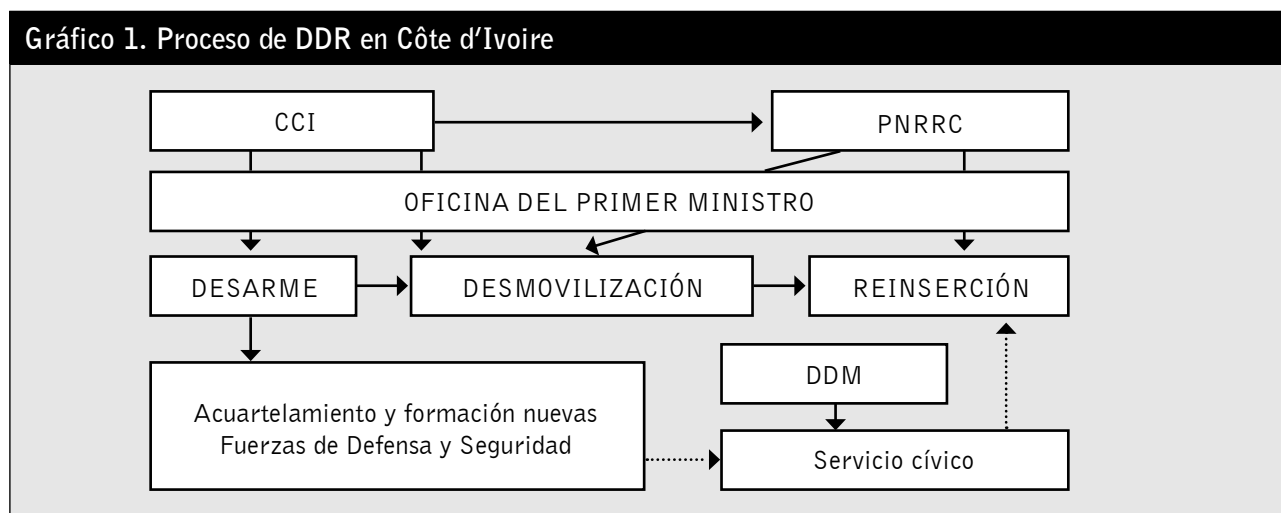
Independientemente de la estrategia adoptada, es necesario tanto consolidar la reintegración económica (microcréditos, creación de empleo, pequeñas empresas, reconstrucción de infraestructura, formación, acceso a servicios básicos) como social (reconciliación, reparación, justicia, verdad). Además, dentro de los proyectos de reintegración comunitarios, otro aspecto imprescindible es el empoderamiento de la propia comunidad para que sus miembros se sientan partícipes del programa de DDR, es decir, que sean sujetos activos en la planificación del mismo. Con este fin se acostumbra a realizar grupos de trabajo, que si bien están gestionados por los organismos ejecutores del programa, deben hacer recaer el peso decisorio en la propia comunidad. En este sentido resultará necesario definir qué se entiende como comunidad, en este caso entendido como aquel colectivo de acogida de grupos objetivo antes citados, aunque también resulta fundamental definir el proceso de toma de decisiones, algo que va especialmente ligado al proceso de reconciliación nacional.³¹

Paralelamente, está prevista la creación de un **servicio cívico**, que comprende una formación adicional de tres meses en educación cívica y seis de formación profesional. Este servicio, está destinado básicamente a la reinserción de las milicias al oeste del país y a aquellos excombatientes que sean susceptibles de acogerse a este tipo de formación antes de incorporarse al proceso de reinserción, debido a su historial y características.

Por lo que respecta al DDM, éste no se ha iniciado, pero los 981 miembros de milicias que se desmovilizaron exigieron una compensación

³¹ Véase el apartado de reconciliación y justicia transicional.

Gráfico 1. Proceso de DDR en Côte d'Ivoire



estimada en unos 762 euros. En una ceremonia de entrega de armamento llevada a cabo en mayo de 2007, de las 1.027 armas que se habían anunciado, únicamente se presentaron 555, contabilizadas por la ONUCI, sin ningún tipo de número de identificación. La existencia de dicha compensación puede ser una de las razones para que se produzca una posible duplicación de los candidatos a acogerse a estos programas.

Desde el Gobierno también se ha creado un grupo de trabajo para la reestructuración y refundación de las FFAA, entendido como un órgano de reflexión que tiene como principal objetivo la realización de un cuadro general de organización, composición y funcionamiento de las FDS. En definitiva, el proceso para las FANCI ha sido el de acuartelamiento, mientras que para las FAFN se prevé el reagrupamiento, y el desmantelamiento para las milicias al oeste del país.

En materia de **acompañamiento internacional**, tanto la ONUCI como las Forces Licorne³² colaboraron en el diseño y en la implementación del programa, a través de una Sección de DDR. Asimismo, la ONUCI lidera un grupo de coordinación inter-agencias, creado de manera informal (junto con el Banco Mundial, la UE, Japón y Francia) para debatir el estado del proceso y armonizar las labores de acompañamiento. El PNUD, por su parte, se encarga de tareas de certificación y maneja unos fondos procedentes principalmente de la UE, Japón, Noruega, Dinamarca y Francia.

Evolución del programa de DDR

Tras el diseño del actual programa, el presidente, Laurent Gbagbo, y el primer ministro, Guillaume Soro, presidieron a mediados de 2007 la ceremonia de la "llama de la paz", consistente en la destrucción simbólica de armas, que serviría para marcar el inicio del proceso de desarme en el país. Esta ceremonia de carácter simbólico se convirtió también en un hecho histórico, por ser la primera vez desde 2002, año del estallido del conflicto armado, que el presidente se desplazaba hasta la localidad de Bouaké, al norte del país (zona dominada por el grupo armado de oposición FAFN durante los últimos años) (UN: 2007).

A finales de 2007 parecía iniciarse el proceso de desarme con dos ceremonias de destrucción de armamento a norte y sur del país (Bouaké y Tiébissou, respectivamente). Éstas fueron concebidas como procesos piloto y de carácter fundamentalmente

simbólico, en las que un destacamento de cada bando se retiraba de primera línea del frente a puntos de acantonamiento. Asimismo, se reconoció que los problemas de logística e infraestructura a los que se han enfrentado las FAFN resultan más complejos que los de las FANCI, por lo que ya se creía que el proceso en el norte se desarrollaría con mayor retraso del previsto (BBC: 2007).

Asimismo, respecto al desarme y la desmovilización en el norte (Bouaké), de 2.121 armas presentadas antes de la ceremonia, únicamente se recolectaron 1.606, por lo que se cree que las 515 restantes habrían sido recuperadas por las propias FAFN para ser utilizadas de nuevo.³³ Este hecho es un claro reflejo de algo que sucede en muchos programas de DDR en la actualidad: la existencia un cierto descontrol y un escaso seguimiento sobre el destino final de las armas recogidas, con el consiguiente riesgo de desvío en la misma región y/o hacia mercados ilegales en caso que éstas no sean eficientemente almacenadas e incluso destruidas (Escola de Cultura de Pau: 2008).

Las cifras oficiales estiman en 4.000 el número de excombatientes de las FANCI que se acuartelaron entre el 20 de diciembre de 2007 y el 25 de enero de 2008.³⁴ Sin embargo, existían dudas sobre la veracidad de esta cifra, ya que se calculaban números muy inferiores de efectivos acuartelados (ICG, 2008). En este sentido, y tras la aprobación de la resolución 1795 del Consejo de Seguridad de la ONU, la ONUCI apenas tiene tareas de certificación y validación en esta materia, lo que reduce sensiblemente sus competencias respecto a mandatos anteriores y se limita a dar por válidas las cifras propuestas por el CCI.

Sobre el reagrupamiento de las FAFN, a principios de mayo de 2008, se reanudó el proceso en una ceremonia en Bouaké, donde acudieron 1.000 efectivos de dicho grupo. Los soldados que decidieron abandonar el grupo armado, 100 en este caso, se les entregó un paquete de asistencia de 90.000 francos CFA (unos 210 dólares). Aunque con diferencias muy notables, la mayoría de los programas ofrecían ayudas económicas a cada excombatiente que participa en esta fase. Es, al mismo tiempo, una estrategia controvertida que unos analistas apoyan por ser fácil de implementar, considerando que acelera el proceso de reintegración, disminuye la carga económica para las comunidades de acogida y reactiva la economía local, mientras que otros la critican

³² Fuerza de intervención de las FFAA de Francia que, bajo el mismo mandato de la MINUSTAH, se encargan del mantenimiento de la paz en el país. Desde 2008, cuentan con 500 efectivos menos, lo que lleva a una cifra total de 1.800.

³³ En este sentido, la ONUCI sólo pudo realizar sus tareas de certificación de las armas a destruir apenas un día antes de la misma ceremonia, lo que dificultó sobremanera dicha responsabilidad.

³⁴ Concretamente, únicamente ONUCI hizo públicos algunos avances en este sentido, como el acantonamiento de 400 soldados en Bondoukou (noreste) o la ceremonia en la que otros 150 fueron licenciados en Sassandra (suroeste).

porque piensan que promueve el mercado de armas u otras actividades ilegales, además de incitar al derroche improductivo, estimular la aparición de combatientes "fantasma" o producir el resentimiento de la comunidad (Escola de Cultura de Pau: 2008).

Finalmente, ya en marzo de 2008 se reunieron las partes firmantes del APO para debatir sobre los progresos alcanzados en la implementación del acuerdo. En materia de desarme y desmovilización para las FAFN y el proceso de DDM al oeste del país, solamente se podría considerar como iniciado el proceso a partir de mediados de marzo con la entrega por parte de la ONUCI de los tres centros de acantonamiento en el norte. La perspectiva de la reintegración tampoco resultó suficientemente halagüeña, ya que el PNRRC constató una falta alarmante de fondos (las peores estimaciones hacen referencia a un vacío cercano al 70%), mientras que todavía quedaba pendiente el diseño del servicio cívico (Fraternité Matin: 2008).

En cuanto a la financiación del DDR, el Banco Mundial aprobó en mayo de 2007 una subvención de 40 millones de dólares para la reintegración económica de excombatientes, jóvenes relacionados con grupos armados y otros jóvenes en situación de riesgo. Teóricamente, estaba prevista que esta financiación se destinara a la oficina del primer ministro aunque en el mes de noviembre, tras el intento de redacción de un memorando de entendimiento compartido sobre la reintegración, dicho organismo internacional se desvinculó del posible acuerdo ya que detectó ciertas opacidades e indicios de corrupción, que generaron ciertas dudas respecto a seguir con esta línea de financiación. Estas disensiones hacían referencia especialmente al alto coste económico de la reintegración de los excombatientes y a los posibles problemas presupuestarios que se podrían producir en las arcas del Estado si no se recortaba el número de efectivos de las FANCI cuando estas se reunificaran. Finalmente, el programa de reinserción económica del BM pasó a dirigirse específicamente a la población joven considerada en situación de riesgo.³⁵

A modo de conclusión, se debe señalar que las distintas instituciones encargadas del proceso (CNDDR, PNDDR y PNDDR/RC) han dirigido sus esfuerzos especialmente a actividades de sensibilización, con promesas incumplidas que pueden igualmente ser una fuente de inseguridad, como por ejemplo la supresión de la compensación por desmovilización (Banco Mundial ; UE: 2008).

Evaluación del proceso actual de DDR

El balance actual de los distintos procesos en marcha no resulta excesivamente positivo ya que apenas se han iniciado los procesos en el norte y el oeste. Mientras que oficialmente se da por acabado el reagrupamiento de las FFAA estatales, únicamente se han registrado la desmovilización de 700 de los 5.000 efectivos previstos, aduciendo problemas logísticos.

Otro de los problemas identificados es la grave proliferación de armas ligeras en el país, ya que en las ceremonias iniciales del proceso de DDR ("flamme de la paix") se registraron las armas en mal estado y desaparecieron las útiles. La proliferación descontrolada de armamento es una de las problemáticas a las que se tiene que enfrentar el país, por lo que será preciso diseñar procesos de recolección de armamento desde la sociedad civil, algo que ya se ha planteado desde el PNUD (de momento bajo la idea de los programas de "Armas por Desarrollo" como se había realizado en Liberia o Sierra Leona).

En relación la situación del embargo de armas vigente sobre el país, el presidente Gbagbo cuestionó ante la Asamblea General de la ONU la persistencia del mismo, toda vez que la guerra ya ha terminado, e instó a un levantamiento parcial. Igualmente, se solicitó el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre tres personas, Charles Blé Goudé, Eugène Djue y Kouakou Fofie, máximos responsables militares de los Jeunes Patriotes y FAFN y acusados de amenazar el proceso de paz, aunque hasta el momento se ha hecho caso omiso de esta demanda. Finalmente, el Grupo de Expertos sobre el embargo de armas de Côte d'Ivoire informó al Consejo de Seguridad de que había reunido la suficiente información como para afirmar que miembros de las FANCI, leales al Gobierno, y de las Forces Nouvelles estaban recibiendo entrenamiento militar fuera del país. El grupo igualmente expresó su preocupación por la imposibilidad de la ONUCI de realizar una nueva inspección en las instalaciones de la Guardia Republicana para llevar a cabo la supervisión del embargo de armas, y que las autoridades marfileñas negaron de forma reiterada el acceso a estas instalaciones argumentando a que la misión no tiene mandato llevar a cabo esta inspección (UN: 2008).

Por lo que respecta a la reintegración, se ha detectado un enorme vacío de financiación para las actividades del programa del PNRRC, especialmente tras la ya mencionada desestimación de financiación por parte del Banco Mundial. Si bien desde el propio PNRRC se asegura su plena disponibilidad a desarrollar los proyectos diseñados,

³⁵ Op. Cit. 27

no resultaba tan claro que únicamente se tuviera que acoger a los 8.150 excombatientes previstos inicialmente (cifras todavía por determinar), además de existir ciertos cálculos que cifraban en alrededor de un 60% de déficit en el presupuesto.

Además, tampoco se ha iniciado el proceso del servicio cívico, sin que se hayan establecido criterios para la selección de candidatos. Otros problemas que se han detectado son que el programa está gestionado por una estructura militar (CCI, encargado de la formación cívica durante los tres primeros meses) a pesar de presentar características civiles; que las estimaciones sobre el número de excombatientes se encuentran muy por debajo de lo real; que el mantenimiento en centros de menores puede generar inseguridad y es mucho más recomendable reinsertarlos en sus comunidades; la ausencia de estudios socioeconómicos; o la falta de concreción sobre promesas de empleo público, civil o militar (Banco Mundial; UE: 2007).

Un proceso óptimo debería pasar por la descentralización de los proyectos a las comunidades, a través de una aproximación más real y detallada a las necesidades de mercado para la creación de empleo, los partenariados entre el sector público y privado o la constitución de microempresas. Con esta aproximación, las autoridades locales, representadas en este caso bajo la figura del prefecto y el subprefecto, se utilizarían para la negociación y gestión de los proyectos de desarrollo (Banco Mundial / UE: 2007). Este tipo de proyectos de descentralización por el momento solo han sido desarrollados de manera bilateral por la agencia de cooperación alemana (GTZ) en todo el país, pero con especial énfasis en el suroeste, donde operan las milicias progubernamentales. Más concretamente, se han realizado proyectos de prevención de crisis y consolidación de la paz, gestión de conflictos, oportunidades y creación de empleo para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad (menores y mujeres mayoritariamente) y proyectos para la capacitación de mujeres (GTZ: 2005).

Otro aspecto en el que genera dudas es la interrelación existente entre las diversas instituciones gubernamentales encargadas del proceso de DDR, que sería necesario determinar para evitar posibles solapamientos entre sus actividades. Si bien desde el Gobierno se argumenta que las responsabilidades quedan claramente definidas, los bloqueos de carácter político desde ambas partes, reflejados en el retraso respecto al calendario inicial previsto en el APO, han llevado a que los distintos procesos del programa de DDR se encuentren en distintos grados de evolución, lo que podría llevar a posibles episodios de

inseguridad si no se tiene suficientemente atendido al excombatiente. El caso más flagrante se sigue dando con la inoperatividad del ya mencionado servicio cívico, lo que podría poner en peligro el resto del proceso (Banco Mundial; UE: 2007). Sería aconsejable realizar una correcta disposición descentralizada pero coordinada a su vez, es decir, situando oficinas regionales en las principales áreas donde se viene desarrollando el programa (Escola de Cultura de Pau: 2008).

Por otra parte, uno de los principales errores y dificultades iniciales para el DDR ha sido el pretender iniciar el proceso a partir del marco global del acuerdo de paz, es decir, esperar que el desarme pueda ser efectivo a partir de los progresos políticos significativos. El hecho de intentar varias veces el inicio del desarme de FAFN ha llevado a una politización del proceso, aumentando la desconfianza entre las partes (Banco Mundial; UE, 2007). Esta realidad resulta más perversa en el caso del desmantelamiento de las milicias situadas al oeste del país, ya que ha otorgado un importante grado de responsabilidad a sus comandantes, concediéndoles mayor poder de decisión sobre su desmovilización (Banco Mundial; UE, 2007).

En este proceso, se debería abogar por revisar el concepto tradicional de DDR ya que, más allá del diseño actual del proceso, los actores armados siguen estando a la expectativa de sus posibilidades de reintegración para así poder desarmarse. Se debería cumplir de manera estricta aquello definido en el APO y en los acuerdos políticos complementarios, bajo certificación de la comunidad internacional. Como alternativa, los campos de reagrupamiento podrían pasar a ser responsabilidad del PNRRC, de carácter civil en caso que los combatientes entregasen sus armas para así empezar de forma inmediata la con la reintegración (Banco Mundial; UE: 2007). Asimismo, se podría descentralizar en las dos regiones para llevar a cabo Proyectos de Impacto Rápido con un carácter de proyecto piloto a nivel comunitario para lograr una mayor visibilidad y fortalecimiento de las capacidades en el seno de la comunidad. Se calcula que estos proyectos tendrían una duración que fuera en torno los seis y los nueve meses.

Conclusiones

En conclusión, para una mejora de la situación de seguridad será necesaria una aproximación mucho más localizada, con la implicación de todos los actores responsables y que permita integrar la reforma del sector de la seguridad con la reinserción de los desmovilizados. Se puede constatar que de una zona a otra del país hay muchos aspectos que difieren, como pueda ser el

nivel de inseguridad, los actores, las dinámicas y el número y las características de los excombatientes y milicianos. Asimismo, todavía son muchos los obstáculos por superar, principalmente basados en la reforma del sector de la seguridad y en la ratio de armas entregadas por combatiente. Si estos aspectos logran encontrar una solución, el DDR debe erigirse en uno de los principales pilares, que no el único, para la construcción de paz en Côte d'Ivoire. Una estabilización en materia de seguridad y la creación de unas nuevas FFAA que integren a los contendientes en el conflicto armado, deberían llevar a la estabilización en materia de seguridad y a la celebración de las elecciones.

Finalmente, el aspecto más importante que queda por analizar es que el propio contenido del APO se basa en una reestructuración de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad. Actualmente resulta algo simplificada y presenta ciertos problemas: más allá del número de efectivos de las FAFN a integrarse en el seno de las nuevas FFAA, todavía queda por delimitar la relación entre los rangos de las

distintas facciones, lo que añade ciertas dificultades a todo el proceso en sí y puede ser una nueva causa de tensiones. Además, es una aproximación simplificada ya que deja como residual el número de excombatientes por desmovilizarse (cerca del 20%) que pasan a ser un peligro potencial para las comunidades, pasando a ser grupos considerados de "alto riesgo" (Banco Mundial; UE, 2007).

Sin embargo, hasta el momento se ha concebido que la reforma del sector de la seguridad pase únicamente por la recolección de armamento, cuando también se debería abogar por un proceso de depuración y reforma de las nuevas FFAA, proceso todavía por diseñar. Un aspecto reseñable en esta materia, claro ejemplo de la necesidad de la reforma de este sector, se encuentra en los continuos controles por carretera donde la extorsión es continua. El proceso de reforma del sector de seguridad debe pasar porque los actores civiles opinen al respecto y por diseñar estrategias de seguridad a largo plazo, también en lo referente al presupuesto destinado a este sector.

El proceso de reconciliación y justicia transicional

Cécile Barbeito Thonon

A pesar de que el conflicto armado de Côte d'Ivoire no ha sido de los más virulentos en comparación con otros enfrentamientos bélicos, y que no existe un enquistamiento en posiciones polarizadas, sino más bien una voluntad compartida de volver a una situación de paz, no es menos cierto que existen heridas abiertas pendientes de ser abordadas.

Después de analizar el impacto de la violencia y el alcance de las violaciones de derechos humanos en el país, este apartado pretende describir las iniciativas que se esfuerzan por promover la reconciliación nacional, ya sean impulsadas por el estado, por la sociedad civil marfileña, o por organizaciones de la sociedad civil internacional, analizar su impacto, y extraer lecciones de construcción de paz.

Violaciones de Derechos humanos durante y después del conflicto armado

La crisis de Côte d'Ivoire llevó a no pocas violaciones de derechos humanos, en grados muy diferentes según las regiones, resultando más afectadas las regiones del norte y el oeste, y la ciudad de Abidjan. Las organizaciones e instituciones de derechos humanos coinciden en responsabilizar de las violaciones de derechos humanos tanto al Ejército regular (FANCI) como a los grupos armados de oposición (FAFN), como a los mercenarios contratados por cada una de las partes, y a las milicias progubernamentales.

Violaciones de derechos humanos de civiles

Durante el conflicto se generalizaron numerosas violaciones de los derechos humanos de los civiles. La organización de derechos humanos Human Rights Watch describe como "centenares de civiles percibidos como simpatizantes del movimiento rebelde basado en el norte [fueron] acosados, agredidos, arbitrariamente arrestados, detenidos, torturados y en numerosos casos, ejecutados en base a su pertenencia étnica, religiosa y nacional, real o supuesta. En el oeste del país, civiles [padecieron] igualmente numerosos y graves abusos, incluidos ejecuciones sumarias, actos de tortura, violaciones y saqueos de bienes civiles, cometidos por los miembros del movimiento rebelde, las milicias y los mercenarios liberianos" (HRW: 2004). También las Fuerzas armadas francesas fueron responsables de la muerte de entre 20 y 60 civiles durante un ataque en noviembre de 2004.

Las violaciones de los derechos humanos a civiles desencadenadas por el conflicto, y la escasa

persecución judicial de sus responsables como se verá a continuación, han hecho que, tras varios años después del fin de la guerra, continúen habiendo graves abusos. En 2005, ONUCI todavía recibía 20 informes al mes de amenazas de muerte a personas residentes en el norte del país, y se acosaron, intimidaron, o incluso atacaron a miembros de partidos de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, etc. (HRW: 2005).

Violaciones de derechos humanos de mujeres

Aunque la información existente al respecto es claramente insuficiente y poco fiable, se conoce que el conflicto armado desencadenó un aumento dramático de las agresiones sexuales, principalmente en la región del oeste, donde algunos estudios locales calculan que dos de cada cinco mujeres han padecido algún tipo de agresión sexual. Se ha documentado que tanto las FANCI como los grupos de oposición fueron perpetradores, y que estas agresiones se han seguido cometiendo una vez finalizado el conflicto. También se conocen casos de agresión sexual cometido por las fuerzas de interposición de ONUCI. Human Rights Watch ha documentado casos de violencias sexuales en Côte d'Ivoire tales como "violaciones individuales y en grupo, esclavitud sexual, incesto forzado, y agresión sexual insigne. Numerosos combatientes han violado mujeres de suficiente edad para ser sus abuelas, niñas que no tenían más de seis años, mujeres embarazadas, y madres lactantes." (HRW: 2007)

Las agresiones sexuales contra las mujeres les han producido daños físicos y psicológicos, que en muchos casos se han sumado a la estigmatización y el rechazo de sus comunidades. La degradación de los servicios de salud especialmente en las regiones del norte y del oeste, además, han impedido que las mujeres recibieran una atención médica y psicológica adecuada (Amnistía Internacional: 2007).

Desconfianza interétnica

El conflicto armado también ha tenido como consecuencia una creciente polarización étnica. La *Ivoiritié* hace referencia a las personas consideradas marfileñas (de padre y madre autóctonos) a diferencia de las extranjeras (de padre o madre alógenos), lo cual excluye a los hijos de parejas mixtas (alógeno-autóctono) de ser considerado marfileños. Este concepto se institucionalizó en julio de 2000, incluyendo dentro de los requisitos para optar a la presidencia del país

la obligatoriedad de que tanto el padre como la madre del candidato fueran marfileños para restar oportunidades del candidato del principal partido de la oposición (Alassane Dramane Ouattara, del que se dice que tiene un padre burkinabés). Poco a poco el concepto fue calando en la sociedad hasta convertirse en un posicionamiento xenófobo. “El criterio para poder recibir una identidad marfileña se volvió más y más estricto, y la documentación de origen de uno de los padres debía ser entregada para conseguir el estatuto de residente. Tener un nombre que indicaba ser del norte, y en particular de origen burkinabés se volvió cada vez más estigmatizador, mientras que la ideología xenófoba de la *Ivoirité* se convertía en un arma para la influencia y el control político. La *Ivoirité* se convirtió en el criterio para la participación en la distribución de los recursos cada vez más escasos (trabajo, propiedad y poder) y también la ciudadanía.” (Nordas: 2008)

Utilización de mercenarios y menores soldados

En referencia al empleo de combatientes no legítimos según el Derecho Internacional Humanitario, durante el conflicto armado todos los actores armados reclutaron menores para ser soldados. Algunos de ellos fueron reclutados en Liberia (HRW: 2005). Otros combatientes que han violado la legalidad internacional son los mercenarios que hubo en el oeste del país, provenientes en gran parte del conflicto armado de Liberia, pero también de otros países africanos y de Europa. Tanto las FANCI como los grupos armados de oposición reclutaron a mercenarios – o incluso a refugiados liberianos – para integrarlos en sus tropas. La presencia de mercenarios se tradujo en saqueos de las casas vacías, más tarde en saqueos de las casas ocupadas, y en caso de resistencia, abusos físicos de sus propietarios (HRW: 2003).

Incitación al odio y la violencia por parte de los medios de comunicación

Los medios de comunicación tuvieron un papel importante en el fomento del discurso del odio entre la población, antes y después del inicio del conflicto armado. La estrecha vinculación de la

prensa escrita con los partidos políticos, y el corte de emisión de radio y televisión de las cadenas internacionales (RFI, BBC, TV5) decretado por el Gobierno al inicio del conflicto armado, facilitaron la polarización de los discursos (HRW: 2003). Los medios de comunicación llegaron a incitar al enfrentamiento contra el otro. La implicación de la prensa como actor influyente en el conflicto armado también se tradujo en ataques a periodistas o a periódicos de la oposición que fueron saqueados o quemados.³⁶

El proceso de reconciliación de la sociedad marfileña

Según los hechos ocurridos durante el conflicto armado, podría haber varios niveles de reconciliación posibles:

- Combatientes / población civil: abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y por parte de los grupos armados contra la población civil.
- La población entre sí: población del sur/población del norte;³⁷ o bien población autóctona (guéré) / alógena (*forains*) en el oeste del país.
- Población marfileña / comunidad internacional (Francia).

Los siguientes apartados analizarán cuáles de estas dimensiones se están abordando, quién las asume, y hasta qué punto pueden facilitar o dificultar el proceso de construcción de paz.

Elementos facilitadores de la reconciliación

Para llevar a cabo un proceso de reconciliación efectivo, es necesario primero analizar en profundidad qué elementos pueden ayudar a conectar o al contrario a dividir a las partes enfrentadas durante el conflicto.

³⁶ En particular Le Patriote, 24 Heures, Le Nouveau Réveil y Le Libéral Nouveau.
³⁷ Una de las causas subyacentes al conflicto fue la generación de estereotipos respecto a la población procedente del norte, considerados como extranjeros por gran parte de la población del sur, lo que llevó a prácticas de discriminación que fomentaron la violencia.

Tabla 1. Elementos conectores y divisores de las partes enfrentadas en Côte d'Ivoire	
Elementos Conectores	Elementos Divisores
<ul style="list-style-type: none"> - Las tribus y las religiones son múltiples y superpuestas - Métodos tradicionales de resolución de conflictos - Llamadas a la paz de cantantes (sobretudo después de la crisis) - Los Elefantes, equipo de futbol nacional 	<ul style="list-style-type: none"> - La 'Ivoirité': definición restrictiva de lo que es ser marfileño que excluye a las minorías de origen extranjero o mixtas (26%) - Discurso del odio de los medios de comunicación

En Côte d'Ivoire, como en otros países africanos, existen lugares de reunión sagrados, como los Árboles de palabras (*Arbre à Palabres*). Estos espacios, herencia de la tradición africana, cumplen una función de regulación de conflictos. Los Árboles de palabras son espacios de reunión, la sombra de un árbol, en que los sabios del pueblo se reúnen para discutir de las cuestiones importantes para el pueblo. El Árbol de palabras cumple tres funciones (Sylla: 2007). La primera es la gestión política, en que el jefe de la comunidad toma las decisiones de acuerdo con los puntos de vista del resto de personas de la comunidad. La segunda función es la regulación de los conflictos y aplicación del derecho consuetudinario, de acuerdo con tres características: que la mayoría de procesos se resuelven amigablemente, que existe la posibilidad de recurrir las decisiones, y que no se busca una justicia punitiva sino restaurativa. La tercera función es la regulación social psicodramática, en que un cazador de brujos (*djina-tigui*) celebra una ceremonia vestido con máscaras, con músicas de tambor, baile, con toda la comunidad para señalar públicamente a las personas que han cometido actos de brujería. Este acto permite descubrir qué personas se han comportado de forma reprobable respecto a otros miembros de la comunidad (los brujos, que con la ceremonia se ponen en trance), y se convierte así en una forma de regulación de los comportamientos.

Otro aspecto de la cultura africana que facilita el diálogo intercultural y la reconciliación son las Alianzas o Parentescos de Broma (*Alliances et Parentés à Plaisanterie*),³⁸ que son formas de relación interétnicas basadas en la broma. Tomando con sentido del humor las diferencias entre étnias, se contribuye a desdramatizar las diferencias y considerarlas, al contrario, como una riqueza. Estas alianzas toman forma de pactos formales entre grupos étnicos o clanes, y tienen por objetivo prevenir los conflictos, y establecer la concordia entre ellos. Estos pactos suelen regular el compromiso mutuo de no agresión, la mediación de conflictos, el deber de solidaridad y de asistencia mutua, bromas de todo tipo entre aliados (siempre que no se falte al respeto de la persona de la otra étnia), etc. Los pueblos de Côte d'Ivoire y de los vecinos de los países fronterizos han firmado alianzas interculturales desde antes de la colonización francesa. Existen alianzas en el seno de algunas familias étnicas (entre diferentes pueblos Akan, Gur, Krou y Mandé), pero también entre estas familias (entre algunos pueblos Akan y algunos pueblos Krou, entre algunos pueblos Gur y algunos pueblos Mandé, etc.). (LIDHO y UTL: 2004)

Existen otras muchas formas tradicionales de resolver conflictos en el país, aunque muy diversas entre ellas, dependiendo de las características de las comunidades (si son agricultoras o ganaderas, por ejemplo). Sin embargo, las formas tradicionales de resolución de conflicto no son muy utilizadas cuando existe otro tipo de autoridad establecida. En ese caso, las comunidades suelen conferir la competencia a la administración existente. En Côte d'Ivoire, esta realidad ha generado problemas en las regiones controladas por los grupos armados, ya que éstos asumieron supuestamente las competencias de la administración, pero sin una capacidad real de resolver conflictos o bien imponer justicia, lo cual ha desembocado en una situación descontrolada.³⁹

Políticas y prácticas de reconciliación

Considerando que para que exista reconciliación deben existir previamente medidas que impongan justicia y recuerden a las víctimas, analizaremos cuáles son las políticas estatales de justicia transicional para responder a las necesidades de Verdad, Justicia, Reforma institucional, Reparación y Reconciliación.

Medidas para esclarecer la verdad

Tal y como queda recogido en los Acuerdos de Linas-Marcoussis, el Gobierno debe facilitar la creación de una Comisión Internacional encargada de esclarecer la verdad: "que diligencie investigaciones y establezca los hechos en toda la amplitud del territorio nacional con el fin de censar los casos de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario desde el 19 de septiembre de 2002" (art IV – 2.). El Acuerdo especifica algunas de las violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas, como los escuadrones de la muerte o las ejecuciones sumarias. Además, la investigación de la Comisión Internacional debe poder identificar a los presuntos responsables que deberán ser llevados ante la justicia penal internacional (art. IV -2.).

Entre las medidas más significativas de esclarecimiento de la verdad, se pueden considerar las siguientes:

- Grupo Internacional de Investigación sobre las atrocidades cometidas los días 23 y 24 de marzo de 2004. El Grupo llegó a la conclusión de que la matanza de civiles había sido "en su mayoría no provocada, e innecesaria para dispersar a los manifestantes" y que se produjo un uso desproporcionado de la fuerza, aunque no se ha identificado responsables.⁴⁰

³⁹ Entrevista a Adou, K.

⁴⁰ En esas fechas se celebró en Abidjan una manifestación que había sido prohibida por el Gobierno, y que desembocó en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la población civil, provocando al

³⁸ Ver el documento en el anexo.

- Comisión Internacional de Investigación Independiente: se creó el 22 de junio de 2004 para investigar las violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas a partir del 19 de septiembre de 2002. Esta Comisión redactó un informe detallado de las principales violaciones de derechos humanos cometidas en el país e identificó a algunos de sus responsables. Dicho informe fue entregado al Alto Comisionado de Derechos Humanos en octubre del 2004 y al Secretario General en diciembre del 2004, pero tres años y medio más tarde todavía no se han hecho públicas sus conclusiones. Varias organizaciones de derechos humanos han reclamado insistentemente que se publiquen para poder conocer sus recomendaciones, y que se tomen medidas al respecto (Amnistía Internacional y HRW: 2007).
- Comisión Nacional de Derechos Humanos, prevista por los acuerdos de Linas-Marcoussis para "velar por la protección de los derechos y libertades en Côte d'Ivoire" (art. VI – 1.). Creada en enero de 2007, esta Comisión, que según lo previsto debe estar formada por delegados de todos los partidos y presidida por una persona aceptada por todos los actores políticos, no es todavía operativa debido a la falta de consenso.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha solicitado la creación de una Comisión para investigar el uso de mercenarios, pero no ha sido aprobada. Más allá de iniciativas de organizaciones locales de derechos humanos, tampoco ha habido ninguna iniciativa específica para investigar el alcance de las agresiones sexuales a las mujeres a nivel estatal.

Frente a tal impunidad, algunos sectores de la sociedad civil marfileña han reclamado que se esclarezcan los hechos. Es el caso de un informe de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz de la Universidad de Cocody entregado al Gobierno, que ha destacado la necesidad de reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno, pero no se ha asumido oficialmente.

La principal conclusión respecto a las medidas de esclarecimiento de la verdad es pues que son claramente insuficientes: se han efectuado únicamente dos investigaciones, de las cuáles solo una se ha hecho pública, y en ningún caso se ha traducido en una asunción de responsabilidad por parte de los perpetradores.

menos 25 muertos (aunque algunas fuentes hablan de más de 40) y numerosos arrestos. La protesta había sido convocada por los principales grupos opositores para denunciar la falta de compromiso del Presidente Gbagbo con la implementación de los acuerdos de paz.

Persecución judicial

La responsabilidad penal de los responsables de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ha sido un tema poco mencionado en los diferentes acuerdos de paz, y regulados de forma todavía más laxa por las leyes estatales: lejos de prever una persecución judicial, han establecido al contrario una amnistía limitada.

El Acuerdo de Linas-Marcoussis preveía la amnistía de los militares y los soldados exiliados siempre que éstos no fueran autores de "infracciones económicas graves y de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario". (Art. VII – 5.). El APO, de nuevo, reafirmó que la amnistía no podía ser aplicada en casos de "crímenes económicos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" (art. 6.3.), cometidos entre el 17 de septiembre del 2000, y marzo del 2007.

Sin embargo, el 12 de abril de 2007, solo un mes después de acordar el contenido del texto de Ouagadougou, el presidente Gbagbo promulgó una ley de Amnistía a "las infracciones contra la seguridad del Estado y la Defensa nacional cometidas por nacionales marfileños en el interior del territorio o en el exilio", no aplicable a las "infracciones económicas y delitos que no supongan un riesgo a la seguridad del estado". De esta manera, la ley estatal ha significado de facto ampliar la amnistía a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Cabe recordar que esta ley es contraria al derecho internacional, ya que según éste, las violaciones del derecho internacional humanitario como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, o las violaciones graves de los derechos humanos no pueden ser amnistiadas.

En la práctica, efectivamente, y a pesar de que han pasado cinco años desde el final del conflicto armado, todavía no se ha juzgado a ninguna persona presuntamente responsable de violaciones de derechos humanos. En cambio, 61 presos civiles y militares fueron liberados el 7 de julio de 2007, beneficiándose de la amnistía.

Si la opción del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario no puede ofrecer garantías de que se imponga justicia en el país, queda por analizar la contribución de la justicia internacional. En 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió, a través de su Resolución 1572, imponer sanciones a toda persona que "fuera reconocida responsable de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Côte d'Ivoire

sobre la base de informaciones en la materia, [y] de toda otra persona que incite públicamente al odio y a la violencia" (CSNU: 2004). Esta resolución se tradujo en la imposición de sanciones a tres personas, a quien se prohibió salir del país y cuyas cuentas fueron congelados.⁴¹ Algunas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado que estas medidas son de "importancia media", y condenan el hecho de que China y Rusia se hayan opuesto a la imposición de sanciones sobre dirigentes del FPI, el partido del presidente Gbagbo (HRW: 2007a).

Côte d'Ivoire no es Estado miembro de la Corte Penal Internacional. Aún así, en 2003 el Gobierno presentó, presionado por la comunidad internacional, una declaración ante dicho organismo aceptando su jurisdicción para investigar los crímenes cometidos desde septiembre de 2002. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno aceptó formalmente que el Fiscal de la Corte efectúe una visita preliminar al país para determinar si se debe abrir o no una investigación sobre las violaciones de derechos humanos, las autoridades marfileñas han postergado la fecha para no hacer efectiva la visita (ECP: 2008).

Reforma institucional

Si una de las causas del conflicto fue la falta de acceso de una parte del país a los servicios básicos del Estado (sanidad, educación, etc.) la crisis no hizo más que empeorar la situación, especialmente en las zonas controladas por los grupos armados de oposición. Este hecho hace necesario un rápido restablecimiento de la administración en el conjunto del territorio. Este despliegue institucional, además, debe hacerse de manera que reforme los elementos de la estructura política y judicial que han llevado o han contribuido a la discriminación y la violencia. Veamos qué instituciones se han reformado, y cuáles son las principales tareas pendientes:

a) La Reforma del Gobierno

La creación del Gobierno de Reconciliación Nacional a raíz de los Acuerdos de Linas-Marcoussis supone una mayor representatividad de las fuerzas de la oposición. Se permite así una mayor participación de los partidos de la oposición en el proceso de salida de crisis hasta que se celebren las elecciones.

b) La reforma de las fuerzas de seguridad

La reforma de las Fuerzas de Seguridad se centra esencialmente en las FFAA. El programa de DDR

prevé la reestructuración y la integración de los combatientes de los grupos armados de oposición al Ejército regular. Esta medida puede ser considerada positiva de cara a la reconciliación, en la medida en que integrará a combatientes antiguamente enfrentados bajo una misma institución. En lo que se refiere a la policía, no existe ninguna reestructuración del cuerpo prevista oficialmente, aunque tanto el Ejército como la Policía reciben capacitación en Derecho Internacional Humanitario por parte del CICR. Por otro lado, también existen hechos relacionados con el sector de seguridad que pueden dificultar la reconciliación. Algunos sectores advierten que existe un proceso de nepotismo a favor de la etnia Beté en el seno de la Policía, que se traduce en una priorización no oficial de la contratación de personas de esta etnia en el cuerpo de seguridad.⁴² Por otro lado, y teniendo en cuenta que muchas de las empresas de seguridad privada del país son propiedad de personas muy ligadas al presidente – entre las que se encuentra su mujer Simone Ehivet Gbagbo, también de etnia Beté –, cabe cuestionar hasta qué punto puede considerarse que las fuerzas de seguridad del estado se han reformado. En cualquier caso, una política (integración de los combatientes de la oposición al Ejército, sin distinciones étnicas) y otra (promoción de la 'beteización' en la policía e inversión de los políticos del Gobierno en empresas de seguridad privada) parecen contradictorias.

c) La reforma del sistema judicial

Durante el conflicto armado, el sistema judicial fue prácticamente desarticulado en el norte del país, empeorando las disfuncionalidades endémicas del sistema judicial. Aunque se reconocen algunos avances, como la creación de nuevas Cortes de Apelación (en Man, Korhogo y Abengourou) y de tribunales (en Abobo, Port-Bouet y Giglo), quedan innumerables retos pendientes. Un informe de la sección Estado de Derecho de ONUCI identifica los siguientes: resolver la falta de medios (actualmente solo un 2% del presupuesto estatal se dedica al sistema judicial, un hecho que manifiesta la precariedad del trabajo de la administración judicial); reforzar la formación de los agentes de justicia; acabar con la corrupción generalizada; asegurar la independencia de los magistrados (formalmente independientes de lo político, pero en la práctica condicionados por presiones sociales, administrativas y políticas); y facilitar el acceso a la justicia, inaccesible para muchos por su alejamiento geográfico y el coste que supone acceder a ella (ONUCI: 2007). La reforma de la Justicia es esencial para recuperar la confianza en

⁴¹ Ver apartado *El campo presidencial: Laurent Gbagbo, el FPI y los Jeunes Patriotes*; y *Evaluación del proceso actual de DDR*

⁴² Entrevista a Gramizzi, C.

el Estado de derecho, y especialmente en aquellas regiones en que la autoridad del Estado no se ha desplegado todavía y existe mayor impunidad.

d) El despliegue de la administración

El despliegue de la administración está regulado en el APO: las partes se comprometen a restaurar "el conjunto de servicios públicos, incluidos los servicios sociales de bases como la educación, la salud, el agua, y el saneamiento" (art. IV 4.2.) en todo el territorio del país. La percepción de la población es que este despliegue se está efectuando de forma demasiado lenta.

e) La reforma de los medios de comunicación

Los Acuerdos de Pretoria reconocen que la Radio Televisión Marfileña (RTI) "debe ser utilizada para favorecer la unidad y la reconciliación nacional" (Pretoria, art. 11), y para ello prevé la reconfiguración de su Consejo de Administración. Los Acuerdos de Linas-Marcoussis también prevén medidas económicas para favorecer la independencia financiera de la prensa (Linas-Marcoussis, art. V – 2.). Aún así, la televisión pública sigue siendo un instrumento para comunicar la acción del Gobierno, y no existen canales de televisión independientes.

Teniendo en cuenta la lentitud que requieren las reformas estructurales, se puede considerar que existe una cierta reforma de las instituciones. Aún así, no hay que desatender las numerosas tareas pendientes, y agilizar el redespliegue de la administración de una forma que no beneficie a ciertos sectores de la población marfileña y perjudique a otros.

Reparaciones a las víctimas

El proceso para la reparación de las víctimas está dividido en tres etapas: la primera, de identificación de las víctimas, asumida por el Ministerio de la Solidaridad y de las Víctimas de la Guerra, la segunda, de asignación de las reparaciones, asumida por el Ministerio de la Reconciliación Nacional y de Relaciones con las Instituciones, y la tercera, de implementación de proyectos de reconstrucción, asumida por el Ministerio de la Reconstrucción y la Reinserción.

Se considera víctima a "toda persona física o moral que ha padecido daños materiales o corporales debido a la guerra iniciada el 19 de septiembre de 2002" (Ministère de la Solidarité et des Victimes de Guerre: 2008). Aunque no concreta la fecha final del plazo durante el que se consideraría víctima a una persona, la definición puede considerarse bastante completa, ya que reconoce como víctimas

a personas desplazadas, a víctimas de la violencia sexual, y a víctimas de los actores internacionales (Ejército francés y ONUCI).⁴³ La existencia de una categoría específica para las víctimas de la violencia sexual es positiva, ya que facilita su identificación y permite tener una idea de la dimensión del problema. Sin embargo, el Ministerio reconoce la dificultad de que las mujeres se atrevan a denunciar este tipo de violación. A pesar de reconocer esta dificultad, no se prevé tomar medidas específicas para facilitar la denuncia de este tipo de víctimas.

Además de las reparaciones económicas, el Ministerio de Solidaridad y Víctimas prevé reparaciones no monetarias, como la recuperación de la memoria de guerra, el apoyo psicosocial a las víctimas, o la facilitación de ayudas asistenciales de primera necesidad.

La principal dificultad para la identificación de las víctimas es la falta de medios económicos. De igual forma, el Gobierno no ha liberado fondos para las reparaciones a las víctimas, ni para financiar el programa de apoyo al retorno. Existen muchas dudas sobre la capacidad de asignar sumas suficientes para las reparaciones. El mismo ministro se muestra contundente a la hora de evaluar la labor de su Ministerio: "En términos de balance, estamos obligados a reconocerlo: indemnización, cero. Programa de ayuda al retorno: cero" (Ministère de la Solidarité et des Victimes de Guerre: 2008). Esta limitación no es desdeñable, ya que, de acuerdo con la definición de políticas del Ministerio de Solidaridad y Víctimas, la compensación económica es el elemento más importante de la reparación a las víctimas, y que la reparación es, a su vez, la medida de justicia transicional en la que el Gobierno hace supuestamente más énfasis.

Una segunda limitación es la forma en que se ha recogido la información de las víctimas. El Ministerio afirma haber identificado al 90% de las víctimas (un dato probablemente sobreestimado, ya que faltan tres regiones para acabar de cubrir todo el país, y que las personas desplazadas o con pocos medios económicos tienen dificultades para acudir a los puestos para identificarse como víctima). Algunos actores lamentan la falta de publicidad que se ha dado a las campañas de identificación en las ciudades. Este hecho no sólo repercute en la cantidad de personas que se han identificado, también resta efectividad al valor sanador de la identificación de víctimas. En efecto, "el proceso de cicatrización no se produce por medio de la entrega de un objeto – una pensión, un monumento o una exhumación – sino a través del proceso que toma lugar alrededor de él" (IDEA: 2003). Si la campaña de identificación de víctimas se hace de forma silenciosa, en vez de

⁴³ Si bien no están explicitadas en la definición, los formularios para identificarse como víctima incluyen las categorías mencionadas.

activar una campaña nacional reconocida por todos y que dignifique a las víctimas, pierde gran parte de su valor como política de reparación. Para que tenga un valor realmente reparador, en cambio, se requiere un proceso de reconocimiento público de las responsabilidades, a la vez que una dignificación de las personas que han padecido la violencia.

Una tercera limitación es que según los Acuerdos de Linas-Marcoussis, el compromiso del Gobierno de asistir a las víctimas del conflicto armado debe basarse en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (art. IV-4). Dado que esta Comisión todavía no es operativa, las reparaciones a las víctimas dependen únicamente del Ministerio de Solidaridad y Víctimas. Esta modificación del punto acordado en Linas-Marcoussis supone una pérdida de consenso, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaría compuesta de miembros de todos los partidos, mientras que el ministerio depende de un solo partido.

Una cuarta limitación es que, si bien el Ministerio de Solidaridad y Víctimas no ha terminado la identificación de los damnificados, otros ministerios con funciones equiparables están llevando a cabo acciones de reparación, como el Ministerio de la Reconciliación, y el Ministerio de la Reconstrucción y la Reinserción, que definen y desarrollan proyectos en las zonas supuestamente más castigadas por el conflicto armado. A pesar de que el personal de los tres Ministerios encargados de las reparaciones a las víctimas asegura lo contrario, es difícil eludir la descoordinación en sus acciones. Esta tricefalia contribuye a la compartimentalización del supuesto proceso de reparación de las víctimas.

Como se acaba de argumentar, las políticas de reparación cuentan con numerosas limitaciones. Este hecho es especialmente grave, ya que el Gobierno ha apostado por la reparación como su principal política de justicia transicional, en detrimento del reconocimiento de la verdad y de la aplicación de la justicia a través de tribunales ordinarios o extraordinarios.

Reconciliación

a) La reconciliación impulsada por el Gobierno

Una forma de considerar la reconciliación, las medidas para favorecer el acercamiento entre comunidades divididas, es promover dicho proceso en tres etapas: la coexistencia pacífica (en la que se favorece el restablecimiento de la seguridad y de la comunicación básica entre las comunidades enfrentadas), la confianza (en la que se comienza a ver la otra parte con más humanidad, y en que se pueden distinguir diferentes niveles de culpabilidad) y el esfuerzo de empatía (en la que las partes son sensibles al dolor del otro) (IDEA:

2003). A continuación se analizará hasta qué punto la definición reconciliación acuñada por el Gobierno marfileño se ajusta a esta concepción.

La primera medida de reconciliación, surgida de los Acuerdos Linas-Marcoussis, fue la creación de un Gobierno de Reconciliación Nacional. Éste aglutina a siete partidos, que se reparten los ministerios, representando un mayor reparto de las cuotas de poder entre los principales partidos políticos del país. Varios actores políticos marfileños coinciden en que la creación del Gobierno de Reconciliación Nacional ha contribuido a mejorar la confianza entre los partidos, y a facilitar la gestión conjunta.⁴⁴ Esta tendencia se visibiliza con la confianza generalizada de la sociedad marfileña de que se vaya a respetar el último acuerdo de paz, el APO, mientras que para los acuerdos anteriores existían muchas dudas.

El principal actor encargado de facilitar el proceso de reconciliación es el Ministerio de la Reconciliación Nacional y de las Relaciones con las instituciones, gestionado por el FPI. Su principal objetivo es acercarse a las principales partes enfrentadas (FANCI/FAFN, población autóctona/ alógena), principalmente a través de proyectos asistencialistas para cubrir las necesidades básicas de las poblaciones más afectadas (especialmente de las personas desplazadas), campañas de sensibilización para generar confianza, y la implementación de proyectos de desarrollo comunitarios. Estos últimos promueven la creación de Comités de Paz y de Reconciliación, compuestos por un presidente autóctono, y vicepresidentes de las diferentes comunidades existentes en el municipio (pudiendo ser representantes de burkinabeses, malienses, jefes de comunidades religiosas, mujeres, jóvenes, etc.). Cada comité se reúne regularmente para identificar las causas y resolver los conflictos de la comunidad.

La principal crítica que recibe el Ministerio de Reconciliación hace referencia a los Protocolos de Paz. Estos acuerdos, definidos por el Ministerio como "códigos de cohabitación", o "pactos de no agresión", regulan la propiedad de tierras de los habitantes de las comunidades.⁴⁵ El Ministerio argumenta que los Protocolos de Paz puestos a disposición de las comunidades son modelos abiertos que deben ser consensuados en el seno de los Comités de Reconciliación, y que por tanto cada comunidad tiene la posibilidad de modificarlos. Sin embargo, otros actores mucho más críticos al respecto, cuestionan la capacidad real de modificar o de negarse a firmar de las comunidades, equiparándolos a "acuerdos de

⁴⁴ Es cierto, por otro lado, que la excesiva división de competencias en tareas como la identificación (SAGEM e INS) o la reconciliación (tres Ministerios), donde existen una multiplicidad de instituciones que representan a partidos diferentes para realizar la misma labor muestra, al contrario, la existencia de ciertas desconfianzas todavía entre los partidos. Aún así, se puede considerar que la operatividad del Gobierno de Reconciliación Nacional es una muestra de la mejora de la confianza.

⁴⁵ Ver la "Retrospectiva del conflicto de Côte d'Ivoire", en que se describe el enfrentamiento ligado a la propiedad de las tierras.

servidumbre".⁴⁶ Según voces críticas, los Protocolos de Paz firmados entre autóctonos y personas desplazadas internamente como manifiestos de paz "no tienen en cuenta la ley de tierras nacional. Son en realidad una nueva convención de tierras y de trabajo que autoriza a los autóctonos, *guéré*, acaparar los bienes y el trabajo de los retornados" (IDMC: 2008).

Por otro lado, y en lo relativo a las relaciones con Francia, existen indicios significativos de acercamiento. A raíz de un discurso en febrero de 2008 del Presidente francés, Nicolas Sarkozy, sobre la necesidad de redefinir las relaciones entre Francia y los países africanos a favor de una mayor soberanía africana, el Presidente Gbagbo anunció a mediados de junio que la hora de la reconciliación franco-marfileña "se acerca".⁴⁷ Confirmando esta voluntad, el Ministro de Asuntos exteriores, Bernard Kouchner, afirmó que en efecto es necesaria una política de reconciliación.⁴⁸

b) La reconciliación impulsada por la Sociedad Civil

El rechazo generalizado al conflicto armado de la sociedad se ha plasmado en múltiples manifestaciones simbólicas a favor de la paz y de la reconciliación. A parte de la ceremonia de la "Llama de la paz" organizada por el Gobierno,⁴⁹ se han celebrado varios conciertos por la paz (1.000 voces por la paz, concierto por la paz y la reconciliación, etc.), un tour ciclista por la paz, mensajes públicos a favor de la paz de personajes emblemáticos, etc. Si bien no se puede decir que estos actos tengan un impacto sobre la paz o la reconciliación, si pueden considerarse como indicios de la predisposición de la población hacia la resolución del conflicto.

Los representantes de las principales religiones del país, también, han impulsado iniciativas de diálogo interreligioso. Existe una estructura estable, la Comisión Interreligiosa, que se reúne para debatir las cuestiones más susceptibles de generar conflictos. Y, si bien su capacidad de acción es limitada, es reconocida por diferentes sectores de la sociedad como una institución legítima.

Otra iniciativa interesante de la sociedad civil es la que promueven la LIDHO y la UTL para dar a conocer las alianzas interculturales y los parentescos de broma, para recuperar estas formas tradicionales de prevención de conflictos y promocionar la convivencia. El CERAP, también, desarrolla una actividad educativa destacable, educando a jóvenes en y para la democracia, incorporando reflexiones sobre interculturalidad.

46 Entrevista a Crivellaro, M.

47 "Laurent Gbagbo juge "proche" une réconciliation franco-ivoirienne" - AFP, 13 junio 2008.

48 "Kouchner tourne "une page" avec Abidjan sans "oublier le passé" - AFP, 15 junio 2008.

49 Véase apartado sobre DDR.

c) La reconciliación impulsada por los actores internacionales

Programa de ONUCI para la reconciliación: Inicialmente percibida con recelo, o incluso oposición por parte de muchos actores marfileños (especialmente los sectores progubernamentales, que percibían la intervención exterior como una injerencia), la misión de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire ha ganado gradualmente la confianza de la población. Ésta desarrolla un papel constructivo de reconciliación destinado a cuatro tipos de actores:

- **Periodistas:** como se ha mencionado anteriormente, los medios de comunicación incitaron al odio y alentaron a la violencia en la etapa previa y durante el conflicto armado. ONUCI ha ejercido un papel de control de los medios, denunciando las incitaciones al odio, y a la vez formando a periodistas en periodismo conciliador, en cómo cubrir las elecciones, etc.
- **Mujeres:** el principal objetivo del proyecto con mujeres es favorecer su empoderamiento. Para ello se organizan encuentros regulares para discutir sobre temas relacionados con las mujeres y la paz, y en particular el aporte de las mujeres al proceso de paz.
- **Jefes tradicionales:** el trabajo con estos actores pretende animar a los jefes tradicionales a utilizar su legitimidad para lanzar mensajes de paz. Para ello, se organizan encuentros periódicos en los que se discute sobre cuál debería ser su rol, y como llevarlo a cabo, cada uno en su comunidad.
- **Alumnos de escuelas secundarias:** ONUCI ha visitado una escuela por municipio en la región de Abidjan, y se desplaza actualmente a escuelas de los principales municipios del país, para dar a conocer la labor de ONUCI, informar sobre los pasos necesarios pendientes para el proceso de paz del país, y elegir a un y una estudiante de cada escuela, encargados de promover la cultura de paz en el centro escolar.

El principal instrumento de comunicación de la misión es la emisora de radio ONUCI FM, la única que emite a nivel estatal, y que llega al 80% de la población. La programación incluye numerosas emisiones educativas, como *Woro Woro tour*, una serie ambientada en los taxis colectivos que muestra como abordar situaciones de conflicto de forma no violenta, *Passerelle*, en que se describen formas tradicionales de resolución de conflictos, etc. ONUCI FM es la tercera emisora más escuchada del país.

El conjunto de acciones realizado por ONUCI a favor de la reconciliación ha tenido algunos resultados tangibles, como la suavización del

discurso de los medios de comunicación, o el compromiso de los jefes tradicionales para difundir mensajes de paz. También ha efectuado actos con el apoyo de personalidades reconocidas y comprometidas con la reconciliación, como el cantante Alpha Blondy (que durante unos meses desarrolló la labor de Embajador de la Paz de ONUCI), o el futbolista del equipo nacional de los Elefantes, Didier Drogba. Su principal reto pendiente es cómo trasladar sus logros al nivel estructural, para garantizar la sostenibilidad de sus acciones una vez la misión se retire del país.

ONG Internacionales: Algunos proyectos de reconciliación impulsados por ONGs Internacionales, también asocian la asistencia a los retornados con la creación de Comités de Paz, (métodos comunitarios de resolución de conflictos). Es el caso de los proyectos de Retorno y Reintegración de Personas Desplazadas impulsados por *International Rescue Comitee* en el oeste del país, que capacitan a los Comités de Paz para la resolución constructiva de los conflictos a nivel de comunidad. Estos comités, a menudo alternativos a los consejos de sabios,⁵⁰ tienen la función de regular pequeños conflictos de la comunidad. Su objetivo final es que dichos Comités adquieran la capacidad de resolver incluso los conflictos de tierras, causa de fondo del conflicto al oeste del país, a medida que retornen los desplazados. Aunque el número creciente de retornados puede llegar a saturar la capacidad de gestión de conflictos de los Comités, éstos se están revelando como un instrumento efectivo de regulación de la convivencia.

Las tareas desarrolladas en el campo de la reconciliación son diversas, aunque comparten la característica común de ser desarrolladas a nivel comunitario. Ni siquiera el Gobierno, que hubiera podido ser el actor más propicio a tener este tipo de acercamiento a nivel estatal, ha apostado por iniciar un proceso de reconciliación a nivel de sociedad. Una de las medidas del Gobierno, la de la promoción de los Protocolos de Paz, es muy cuestionable, y puede suponer un motivo de tensión en un futuro entre la población autóctona y la alógena. En efecto, los Protocolos de Paz no solo no resuelven una de las principales causas del conflicto, sino que lo convierten en un problema estructural, codificándolo con pactos escritos en el seno de las comunidades.

Conclusiones

El análisis a las políticas de reconciliación y de justicia transicional de Côte d'Ivoire lleva a concluir que éstas son insuficientes. Las medidas destinadas a la reconciliación entre los combatientes y la población civil, basadas casi exclusivamente en la reparación económica, cuentan con medios financieros insuficientes. Este hecho supone mermar el grado de justicia y reconciliación que requieren los hechos sucedidos en ese contexto. Cabe tener en cuenta que no priorizar el componente de Justicia, favoreciendo la impunidad de los perpetradores de derechos humanos es de extrema gravedad, no solo en referencia a los hechos ocurridos durante el conflicto armado, sino para la situación actual. En lo que se refiere a la reconciliación entre la población autóctona y la población alógena, hay que destacar que no se están abordando las causas de fondo que llevaron a los enfrentamientos, sino que al contrario se están dificultando todavía más las cuestiones relativas a la propiedad de tierras y al derecho al trabajo. El hecho de que temas sensibles como la Justicia y la regulación de tierras no hayan sido abordados como se merece puede tener varias lecturas: por un lado esto puede considerarse una medida prudente, evitando abordar los temas más controvertidos hasta que se celebren las elecciones, pero por otro supone aplazar *sine die* dos temas de crucial importancia para la población y la consolidación de la paz. Por otro lado, la división de las tareas relativas a la reconciliación entre ministerios gestionados por partidos diferentes no facilita su gestión, y no es difícil apreciar incongruencias entre las actividades de unos y otros. En cuanto a la reconciliación franco-marfileña, protagonizada esencialmente por los gobiernos de cada país, no solo parece anticipar la reanudación de relaciones diplomáticas, sino que además se abre la puerta a que se transformen considerablemente las relaciones entre ambos países.

A excepción de las políticas de reconciliación, todas las demás (verdad, justicia, reforma, reparaciones) se han desarrollado con un enfoque de arriba hacia abajo (*top-down*), desligado de las aportaciones que podría haber hecho la población civil. Este hecho puede considerarse como un desperdicio de recursos, ya que diversas organizaciones de la sociedad civil local han demostrado estar dotadas de capacidad de iniciativa y compromiso con la resolución del conflicto. Se puede observar, también, que el proceso de reconciliación se autodefine como una aproximación más económica que judicial o social. La repetida mención del término "cohesión social" es sintomática de una apuesta por la reconstrucción social del país a través de la reconstrucción de las infraestructuras, entendidas como reparaciones a las comunidades

⁵⁰ Como argumenta Maurizio Crivelaro, de *International Rescue Comitee*, los comités de sabios no siempre son representativos de la comunidad, por el hecho de no acoger a miembros de diferentes comunidades, por no representar a los intereses de los jóvenes, etc.

más afectadas. Esta apuesta, sin embargo, depende de que se disponga de los fondos suficientes para financiarlas, lo cual no parece ser el caso. Sin fondos, la política de reconciliación del Gobierno basada en las reparaciones puede quedarse en poco.

A nivel global puede decirse que el impacto sobre la reconciliación es todavía limitado, aunque esta consideración no debe olvidar que los procesos de transformación de las relaciones requieren tiempo.

Conclusiones y recomendaciones

Después de haber analizado en profundidad y desde diferentes perspectivas el proceso de paz en Côte d'Ivoire puede afirmarse que éste avanza, aunque de forma lenta y no sin numerosas dificultades en su aplicación que deberían ser abordadas.

Entre los aspectos más positivos del proceso de paz destacan la mejora en la situación de seguridad; la mayor confianza entre los actores políticos y su creciente colaboración en el seno del Gobierno; la confianza y la predisposición de la población a pasar página y crear nuevas relaciones constructivas; la moderación del discurso del odio; y el enfoque comunitario de gran parte de los proyectos que permitirá reconstruir el tejido social.

Por otro lado, los asuntos que pueden suponer un mayor obstáculo para la paz serían: los litigios sobre la propiedad de la tierra y la necesidad de una ley sobre la propiedad agraria justa e inclusiva; la impunidad de la que se benefician los principales violadores de derechos humanos y la consecuente dificultad de cicatrización de las heridas de la población más afectada por el conflicto armado; la insuficiencia de los fondos destinados a programas de DDR, así como al redespiegue y formación de cuerpos técnicos de la administración o a las reparaciones de víctimas; el alto grado de corrupción de la clase política; y la ausencia de una estrategia internacional para el país después de los comicios presidenciales.

El acuerdo de Ouagadougou parece simbolizar por primera vez desde que estalló la crisis, una verdadera voluntad de los actores políticos marfileños por poner en marcha de forma efectiva el proceso de paz. Hacer de este primer empuje un momento definitorio que impida la vuelta atrás en los logros alcanzados hasta ahora, dependerá de que persista el espíritu crítico y constructivo de toda la clase política, pero también de la capacidad de implicación de la sociedad civil a la hora de exigir responsabilidades, demandar que se cumpla con los plazos establecidos y evitar toda exaltación de odio. Es primordial que todos los actores políticos ubiquen a la paz en el centro de sus objetivos y muestren su capacidad de colaboración y confianza con la finalidad de aunar esfuerzos y maximizar resultados.

La celebración de las elecciones no debe ser vista como un fin en sí mismo, si no como el comienzo de un largo camino hacia la reconstrucción del país y la reconciliación. Sin embargo, el requisito de que los comicios se celebren de forma transparente y libre, y que los resultados sean aceptados por todas las partes (partidos políticos, Forces Nouvelles,

milicias, población en general) es indispensable para que los cimientos de la construcción de paz sean sólidos. El futuro Gobierno legítimo será el responsable de crear e implementar el programa para la salida definitiva de la crisis, por lo que tendrá que contar con el apoyo de todos los sectores políticos, que deben implicarse en la reconstrucción del país, así como de los sectores económicos y sociales más destacados, pero principalmente con el respaldo de la población civil. Por esta razón es necesario que se creen los canales y mecanismos necesarios para hacer a la población civil partícipe del proceso, que cuenten con información directa y fiable sobre todas las iniciativas emprendidas por sus gobernantes para evitar que la paz sea vista como un nuevo reparto de poder entre los poderosos. En este sentido, las iniciativas destinadas a hacer visibles los dividendos de la paz de forma inmediata a la población serán claves para asegurar su apoyo al proceso y su implicación en los logros.

La estabilización económica del país debe estar unida a una mayor transparencia de las cuentas del Estado y a la eliminación de las prácticas corruptas y las redes clientelares que hasta ahora han regido la política marfileña. La institución de un Ejecutivo que gobierne para todos y no sólo para aquellos que le han ofrecido su voto, ni mucho menos para aquellos con los que comparte ascendencia étnica. En este sentido, las elecciones legislativas serán necesarias para reflejar la pluralidad del país en la Asamblea General, pero también lo será que la clase política se comprometa de forma plena con el futuro del país.

Lograr una ley agraria inclusiva será uno de los grandes retos del próximo Gobierno, ya que la actual regulación de la propiedad (aunque todavía no se ha llegado a implementar) podría dar lugar a nuevos enfrentamientos, principalmente en el oeste, entre las etnias consideradas extranjeras y las locales. Esta realidad debe enfocarse también desde la ampliación de los criterios para conseguir la nacionalidad marfileña, o la posibilidad de que se abra un proceso extraordinario de naturalización que acabe con la exclusión de todos aquellos que, aun habiendo nacido en el país, siguen siendo considerados como extranjeros.

Una vez celebrados los comicios quedará pendiente saber hasta qué punto la sociedad civil está dispuesta a demandar responsabilidades sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Hasta el momento, las demandas para que se investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la crisis marfileña han sido muy minoritarias y han tenido

poca repercusión pública. Además la ampliación del periodo de amnistía señalada en el APO, y que posteriormente fue convertida en decreto, corre el riesgo de dejar impunes gran número de crímenes dejando en libertad a sus responsables. Cabría cuestionar si es posible la reconciliación real y duradera de una sociedad si no han sido, cuando menos, señaladas las exenciones y los culpables.

Más allá del derecho humano a tener una nacionalidad y de la posibilidad de obtener un documento de identidad, uno de los grandes retos que quedan por resolver en el futuro marfileño es la institución de un estado de derecho pleno en el que todas las personas se sientan protegidas y obligadas por la ley. Que el hecho de poseer un documento dé acceso a ejercer derechos como ciudadano, ya sean sus portadores nacionales o extranjeros.

Recomendaciones relacionadas con la coyuntura política:

- Tanto la clase política como la sociedad civil deben mantener un espíritu crítico y constructivo a la vez, para demandar que se cumpla con los plazos establecidos y se evite toda exaltación de odio. Todos los sectores políticos económicos y sociales más destacados deben implicarse en la reconstrucción del país;
- Los actores políticos marfileños y la comunidad internacional deben reconocer que las elecciones presidenciales no son el fin, sino el principio del proceso de paz. Será necesario el compromiso de todos después de los comicios para consolidar el proceso y apoyar los avances. La confianza de los donantes será clave en este aspecto.
- La clase política tiene la responsabilidad de ubicar a la paz en el centro de sus objetivos y de mostrar su capacidad de colaboración y confianza con la finalidad de aunar esfuerzos y maximizar resultados. También debe velar por informarse sobre todas las iniciativas emprendidas, para evitar que la paz sea vista como un nuevo reparto de poder entre los poderosos;
- El Gobierno debe esforzarse por conseguir una mayor transparencia de las cuentas y por eliminar las prácticas corruptas y las redes clientelares que hasta ahora han regido la política marfileña.
- La sociedad civil debe adquirir un papel más activo a la hora de exigir responsabilidades, para ello, deben crearse los canales y mecanismos necesarios para hacer a la población civil partícipe del proceso;
- Es necesario abordar algunas de las causas de fondo del conflicto, y que están quedando apartadas del debate político debido a la atención puesta en la celebración de elecciones:
- Una ley agraria inclusiva;

- La ampliación de los criterios para conseguir la nacionalidad marfileña, o la apertura de un proceso extraordinario de naturalización; El hecho de poseer un documento debe dar acceso a ejercer derechos como ciudadano, ya sean sus portadores nacionales o extranjeros.

Recomendaciones relacionadas con el DDR:

- Revisión del diseño actual del proceso ya que las partes armadas siguen a la expectativa de sus posibilidades de reintegración para así poder desarmarse. Se trataría de abogar por el estricto cumplimiento de lo acordado, bajo certificación de la comunidad internacional.
- Diversificación de los proyectos de reintegración para generar mayor visibilidad en las comunidades a través de una aproximación más real y detallada de las necesidades de mercado para la creación de puestos, la creación de partenariados entre el sector público y el privado, o la constitución de microempresas y proyectos productivos.
- Descentralización de los proyectos para llevar a cabo Proyectos de Impacto Rápido con un carácter de proyecto piloto a nivel comunitario para lograr una mayor visibilidad y fortalecimiento de las capacidades en el seno de la comunidad. Se calcula que estos proyectos tendrían una duración que fuera en torno los seis y los nueve meses.
- Aproximación mucho más localizada, con la implicación de todos los actores responsables, que permita integrar la reforma del sector de la seguridad con la reinserción de los desmovilizados, ya que de una zona a otra difieren muchos aspectos: nivel de inseguridad, actores y dinámicas y el número y las características de los excombatientes.
- Búsqueda de la estabilización en materia de seguridad y la creación de unas nuevas FFAA que integren a los contendientes en el conflicto armado, para contribuir a la estabilización y la construcción de paz en todo el país. Para este proceso resulta necesario tener en cuenta el papel y la visión de la sociedad civil, para así poder diseñar estrategias de seguridad a largo plazo.

Recomendaciones relacionadas con la reconciliación y la justicia transicional:

- Verdad: Es necesario impulsar la Comisión Nacional de Derechos humanos, y paralelamente permitir la entrada del Fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar sobre las violaciones de derechos humanos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe hacer públicas sus investigaciones

sobre las responsabilidades acerca de las violaciones graves de derechos humanos para el Gobierno tome medidas al respecto.

- Justicia: La ley de amnistía de 12 de abril de 2007 debe ser derogada, al no cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Los responsables de este tipo de crímenes deben ser juzgados.
- Reforma institucional: debe agilizarse la reforma institucional, en especial la del sistema judicial. Los cargos administrativos deben ser accesibles en función del mérito de la persona, y no por adscripción comunitaria.
- Reparación: Es imprescindible asignar fondos a la reparación de las víctimas del conflicto armado. La excusa de la falta de fondos es inaceptable

para un Gobierno acusado de no declarar grandes beneficios provenientes del petróleo, y una falta de respeto a la dignidad de las víctimas.

- Reconciliación: las medidas de reconciliación deben basarse en la resolución de las causas del conflicto armado. Los protocolos de Paz deben ser anulados, al no cumplir con la ley estatal de propiedad de tierras, y deben establecerse mecanismos para resolver los conflictos referentes a la propiedad y el derecho a cultivar las tierras. A la vez, debe asegurarse el despliegue de la administración al norte del país. El concepto de *Ivoirité* debe ser sustituido por el de ciudadanía, en que todas las personas nacidas en el país tengan acceso a los mismos derechos.

Bibliografía y documentos de referencia

- Amnistía Internacional (2007). *Côte d'Ivoire. Les femmes, victimes oubliées du conflit*. AFR 31/001/2007, Londres: AI. <<http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR31/001/2007/fr/dom-AFR310012007fr.html>>.
- Balencie J.M y de la Grange A. (2004) – *Les Nouveaux Mondes Rebelles*. París: Michalon.
- Bally, F. M. (2008). "Désaccords sur le accord", en *Fraternité Matin*. Abidjan: Fraternité Matin.
- Banco Mundial (2008).1 Abidjan, Banco Mundial.
- Banco Mundial; Comisión Europea (2008), *Securité et «ex-combattants» en Côte d'Ivoire. Propositions pour une nouvelle approche adaptée, pragmatique et progressive*, documento de trabajo conjunto inédito, Abidjan : Comisión Europea.
- Bekoe, D. (2007). *Ensuring a peaceful political transition*. Washington: USIP. <http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2007/1221_cote_divoire.html>.
- Campbell, K. (2006). *Édification d'une paix plus inclusive en Côte d'Ivoire*. Washington: USIP. <http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2006/0807_cote_divoire_french.pdf>.
- Chauveau, J. P y Richards, P. (2007). *Land, agricultural change and conflict in West Africa: regional issues from Sierra Leone, Liberia and Côte d'Ivoire*. París: CSAO/SWAC. <<http://www.oecd.org/dataoecd/44/53/39495967.pdf>>.
- Cornwell, R. (2006). *Côte d'Ivoire: making time*. African Security Review nº 15, Pretoria: ISS.
- Escola de Cultura de Pau (2008). *DDR 2008. Análisis de los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) existentes en el mundo durante 2007*, Barcelona: Escola de Cultura de Pau.
- (2008b) *Fitxes de Justícia Internacional per països. Côte d'Ivoire*. Barcelona: Escola de Cultura de Pau. [consulta: 1 de abril de 2008]. <<http://www.escolapau.org/img/programas/derecho/justicia/ficha003.pdf>>.
- (2008c) *Alerta 2008. Informe sobre conflictos armados, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria.
- Fisas, V. (2008). *Anuario 2008 de Procesos de Paz*. Barcelona: Icaria.
- Galy, M. (2007). *La Côte d'Ivoire tente la réconciliation nationale*". París: Le Monde Diplomatique.
- García Amado, P. (2007). *El proceso de paz: dificultades y perspectivas de futuro*". Serie Conflictes Oblidats, Barcelona: IDHC. <<http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/07articulo060.pdf>>
- Global Witness (2007). *Hot Chocolate: How cocoa fuelled the conflict in Côte d'Ivoire*. Londres : Global Witness. <http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/552/en/hot_chocolate_how_cocoa_fuelled_the_conflict_in_co>.
- GTZ (2005). *Projet Prévention de Crises et Consolidation de la Paix Dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire*, Abidjan: GTZ.
- HRW (2001). *Le nouveau racisme ; la manipulation politique de l'ethnicité en Côte d'Ivoire*, Human Rights Watch Vol. 13, No.6 (A), août 2001, Nueva York : Human Rights Watch. <<http://www.hrw.org/french/reports/ivorycoast/>>.
- (2003). *Trapped between Two Wars: Violence Against Civilians in Western Côte d'Ivoire*, Nueva York: Human Rights Watch.
- (2006). *World report 2006*. Nueva York: Human Rights Watch.
- (2005). *Côte d'Ivoire: le coût de l'impasse politique pour les droits humains*. Nueva York: Human Rights Watch.
- (2007a). *World report 2007*. Nueva York: Human Rights Watch.
- (2007b). *Mon cœur est coupé. Violence sexuelle en CI*. Nueva York: Human Rights Watch. <<http://hrw.org/french/reports/2007/cdi0807/>>
- IDMC (2008). *Côte d'Ivoire: more IDPs return as the peaces process moves forward*. Ginebra: IDMC.
- (2008b). *Overview of Returns. International Displacement Monitoring Centre*. Ginebra: IDMC. [consulta: 27 de mayo de 2008]. <[http://www.internal-displacement.org/idmc/website/countries.nsf/\(httpEnvelopes\)/5FB158412A43594CC125741A0051DFFC?OpenDocument](http://www.internal-displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/5FB158412A43594CC125741A0051DFFC?OpenDocument)>
- International Crisis Group (2003). *Côte d'Ivoire. The war is not yet over*. Dakar: ICG. <<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2389&l=4>>.
- (2006). *Côte d'Ivoire: la Paix comme Option*, Rapport Afrique 109, Dakar: ICG. <http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/french_version/109_cote_d_ivoire_la_paix_comme_option.pdf>.
- (2006b). *Côte d'Ivoire: augmenter la pression*, Briefing Afrique 40, Dakar: ICG.
- (2007) *Can the Ouagadougou Agreement Bring Peace?*, Africa Report 127, Dakar: ICG. <<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4916&l=4>>.
- (2008). *Côte d'Ivoire: Garantir un processus électoral crédible*. Rapport Afrique nº 139. <http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/139_cote_d_ivoire_garantir_un_processus_electoral_credible.pdf>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). *Reconciliación luego de conflictos violentos. Resumen de políticas*. Estocolmo: International IDEA.
- LIDHO/UTL (2004). *Alliances inter-culturelles et parentés à plaisanteries: pactes sacrés de non-agression*,

de solidarité, de convivialité et de paix entre les peuples. Abidjan : Ligue Ivoirienne pour les Droits de l'Homme y Université des Temps Libres.

- Lynch, C. (2005).** *Ivory Coast First Lady leads death squads, report alleged.* Washington: Washington Post.
- Ministère de la Solidarité et des Victimes de guerre (2008).** *Le Journal de la Solidarité. Le Mensuel du Ministère de la Solidarité et des Victimes de guerre.*
- McGovern, M.** – “*International interventions in Côte d'Ivoire: in search of a point of leverage*”. Accord, Conciliation Resources 2008.
- Moreno, I. (2005).** *Frágil proceso de paz en Costa de Marfil.* Madrid: FRIDE.
- (2007)** *Accidentado proceso de paz en Costa de Marfil: revisión crítica de los hechos.* Madrid: FRIDE.
- Naciones Unidas (2004).** *Resolución 1572 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.* <[<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1572\(2004\)>](http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1572(2004))>.
- OCHA (2008).** *La Communauté humanitaire exprime sa préoccupation suite à d'inhabituels mouvements de retour et repli des populations déplacées en zone ouest.* Communiqué de presse, Abidjan : OCHA.
- ONUCI (2007).** *Rapport sur l'organisation du système judiciaire en Côte d'Ivoire.* Abidjan : ONUCI. <[<http://www.onuci.org/pdf/rulesrapport6.pdf>](http://www.onuci.org/pdf/rulesrapport6.pdf)>.
- Seck, C. Y. (2008).** *L'élection impossible?* Jeune Afrique n° 2461, Paris : Jeune Afrique.
- (2008b)** *Les vérités de Guillaume Soro.* Jeune Afrique n° 2462, Paris : Jeune Afrique.
- (2008c)** *La galaxie Gbagbo.* Paris : Jeune Afrique.
- Sylla, L. (2007).** *Anthropologie de la paix. De la contribution de l'Afrique à la Culture de la paix.* Les éditions du CÉRAP. Abidjan; CERAP.
- Nordås, R. (2008).** *Identity Polarization and Conflict: State Building in Cote d'Ivoire and Ghana.* Centre for the Study of Civil War (CSCW), Paper prepared for the 49th International Studies Association Convention, San Francisco, CA. Oslo, Prio. <[<http://www.humansecuritygateway.info/documents/ISA_identitypolarizationconflict.pdf>](http://www.humansecuritygateway.info/documents/ISA_identitypolarizationconflict.pdf)>
- Zeebroek, X. (2008).** *Côte d'Ivoire: La paix malgré l'ONU.* Bruselas: GRIP. <[<http://www.grip.org/pub/rapports/rg08-2_coteivoire.pdf>](http://www.grip.org/pub/rapports/rg08-2_coteivoire.pdf)>.

Documentos útiles

Documento (Fecha)	Disponible en...
<i>Acuerdo de Accra I, II y III (2003)</i>	< http://www.presidence.ci/article.php3?id_article=1890 >
<i>Acuerdo de Paz de Linas-Marcoussis. (23 enero 2003)</i>	< http://www.usip.org/library/pa/cote_divoire/cote_divoire_01242003en.html >
<i>Acuerdo de Pretoria. (6 de abril 2005)</i>	< http://www.ccfid.asso.fr/dossier/cote-d-ivoire/cdi_accords.php >
<i>Acuerdo de Ouagadougou. (4 de marzo 2007)</i>	< http://www.issafrika.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/COTEDIVAGMTMAR07FR.PDF?link_id=14&slink_id=4178&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3 >
<i>Resolución 1721 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2006).</i>	< http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1721(2006) >
<i>Resolución 1572 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004)</i>	< http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1572(2004) >
<i>Decimocuarto Informe del Secretario General sobre la Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (2007)</i>	< http://www.un.org/spanish/documents/index.html >

Otras fuentes de consulta

Abdijan.net, en <<http://news.abdijan.net>> .
 Africatime, en <<http://www.africatime.com/CI>> .
 Centrafrique Presse, en <<http://www.centrafrique-presse.com>> .
 L'Intelligent en <<http://www.lintelligent.com>> .
 La Voix de la Côte d'Ivoire, en <<http://www.lavoci.org>> .
 MPCÍ Info, en <<http://www.mpci.info>> .
 PNRRC, en <<http://www.pnrcc-ci.org/>> .
 RFI, en <<http://www.rfi.fr>> .

Anexos

Relación de entrevistas Gobierno

Persona	Cargo
Kindoh, Victor	Técnico de la División de Víctimas Ministerio de Solidaridad y Víctimas de la Guerra Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 18 de marzo de 2008.
Kouakou, Nicolas	Coronel Centro de Comando Integrado Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 13 de marzo 2008.
Malan, Jean-Paul	Coordinador CCI / PNRRC Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 11 de marzo 2008.
Nanourou, Serge	Asesor del primer ministro Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, marzo 2008.
Ouattara, Daniel	Coordinador nacional PNRRC Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 13 de marzo de 2008.
Ouraga, Zadi	Técnico del Ministerio de Reconciliación Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 13 de marzo de 2008.
Sibi, Mariamme	Directora General de la división de víctimas Ministerio de Solidaridad y Víctimas de la Guerra Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 17 de marzo de 2008.
Traore, Fatoumata	Vicepresidenta Comisión Electoral Independiente Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 14 de marzo 2008.
Yaba, Martin	Jefe de Gabinete Ministerio de Solidaridad y Víctimas de la Guerra Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 12 de marzo de 2008.

ONG locales y otros

Persona	Cargo
Adou, Kevin	Director Adjunto Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP) Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 14 de marzo de 2008.
Akindés, Francis	Sociólogo Universidad Bouaké Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 14 de marzo de 2008.
Atta, Alfred	Gerente Fondation Akwaba Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Bouaké, 17 de marzo de 2008.
Dago, Jean-Paul	Director Archidec Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 8 de marzo de 2008.
Diallo / Blaise / David	Étoiles de la paix ONUCI Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 19 de marzo de 2008.
Koffi Konan, François	Director ONG Espoir-Vie Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Bouaké, 18 de marzo de 2008.
Konan, Venance	Periodista Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 10 de marzo de 2008.
Kouamouo, Theophile	Periodista Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 11 de marzo de 2008.
Kra, Philippe	Director Fondation Akwaba Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Bouaké, 17 de marzo de 2008.
Lezou, Dago Gerard	Titular de la Cátedra Cátedra UNESCO de Cultura de Paz, Universidad de Cocody Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 10 de marzo de 2008.
N'Gouan, Patrick	Presidente Ligue Ivoirienne des Droits Humaines (LIDHO) Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 14 de marzo de 2008.

ONU CI

Persona	Cargo
Amodeo, Margherita	Portavoz de ONU CI y Directora de la Oficina de Información Pública (PIO) Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 11 de marzo de 2008.
Dierkxens, Griet	Jefe de programas de ONU CI FM Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 11 de marzo de 2008.
el-Becaye Seck, Ahmedou	Oficial División de Asuntos Electorales Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, marzo 2008.
Gramizzi, Claudio	Experto sobre transferencia de armas Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad sobre embargo armas Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 12 de marzo de 2008.
Handy, Simon P. Alain	Consejero Político División de Asuntos Políticos Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 8 de marzo de 2008.
Houdégbé, Guy	Oficial Programa de DDR (Bouaké) Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 17 de marzo de 2008.
Kadidjatou Silué, Anne	Técnica del programa de Educación para la paz - Oficina de Información Pública (PIO) Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 18 de marzo de 2008.
Koudjou, Lea A.	Oficial Programa de DDR Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 12 de marzo de 2008.
Ndaruzaniye, Gamaliel	Oficial División de Asuntos Políticos Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Bouaké, 17 de marzo de 2008.
Oreste, Claude Henry	Oficial División de Asuntos Electorales Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, marzo 2008.
Woodyear, Lee	Responsable Técnico del programa de Educación para la paz - Oficina de Información Pública (PIO) Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 11 de marzo de 2008.

Agencias y Organismos Internacionales

Persona	Cargo
Al Rifai, Idriss	Oficial Forces Licorne Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 20 de marzo de 2008.
Brack, Sébastien	Coordinador regional de comunicación Comité Internacional de la Cruz Roja – Côte d'Ivoire Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 21 de marzo de 2008.
Broux, Michel	Asesor Nacional post-conflicto PNUD DDR Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 20 de marzo de 2008.
Crivellaro, Maurizio	Director International Rescue Committee Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 10 de marzo de 2008.
Culbert, Vance	Jefe de misión Norwegian Refugee Council Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, marzo 2008.
Diawara, Bacary	Coordinador del programa "Paix et Tolérance" de UNICEF Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 13 de marzo de 2008.
Díaz Fernández-Gil, Cristina	Embajadora de España en Côte d'Ivoire Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 13 de marzo de 2008.
Ely Dieng, Mame	Oficial PNUD DDR Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 10 de marzo de 2008.
Françis Zacko / Sié Kambou	Oficiales UNICEF DDR Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 11 de marzo de 2008.
Gnangadjomon, Kone	Técnico de proyectos Search for Common Ground Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 21 de marzo de 2008.
Harborne, Bernard	Coordinador de Programa País Banco Mundial Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 14 de marzo de 2008.

Kouadja, Anzian	Oficial PNUD DDR Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 10 de marzo de 2008.
Lakp, Benjamin	Director OIT Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 11 de marzo de 2008.
Manirakiza, Spes	Directora Search for Common Ground Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 21 de marzo de 2008.
Olagboye, Benjamin	Oficial PNUD DDR Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 20 de marzo de 2008.
Saadallah, Youri	Jefe de base Norwegian Refugee Council Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Bouaké, marzo 2008.
Scuppa, Gianmarco	Jefe de Sección Política Delegación de la Comisión Europea en Côte d'Ivoire Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 12 de marzo de 2008.
Thurin, Anne	Coordinadora de protección en el terreno OCHA Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, marzo 2008.
Woerdt, Esther	Coordinadora de proyectos de UNICEF Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 9 de marzo de 2008.
Zadi, Patrick	Técnico de proyectos GTZ- Agencia de Cooperación Alemana Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 12 de marzo de 2008.
Zapella, Claude-Alain	Director de la delegación regional Comité Internacional de la Cruz Roja – Côte d'Ivoire Entrevista por Escola de Cultura de Pau, Abidjan, 21 de marzo de 2008.

Escola de Cultura de Pau (UAB).

La *Escola de Cultura de Pau* fue creada en 1999, con el propósito de organizar varias actividades académicas y de investigación relacionadas con la cultura de la paz, la prevención y transformación de conflictos, el desarme y la promoción de los derechos humanos.

La Escola está financiada básicamente por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) de la Secretaría de Cooperación Exterior y del Departamento para Universidades, Investigación y Sociedad de la Información. También recibe apoyos de otros departamentos de la Generalitat, de ayuntamientos, fundaciones y otras entidades. La *Escola* está dirigida por Vicenç Fisas, que a la vez es el titular de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Las principales actividades que realiza la *Escola de Cultura de Pau* son las siguientes:

- La **Diplomatura sobre Cultura de Paz** (postgrado de 230 horas lectivas y 70 plazas).
- Las **asignaturas de libre elección** "Cultura de paz y gestión de conflictos", y "Educar para la paz y en los conflictos".
- **Iniciativas de sensibilización e intervención en conflictos**, por las que se facilita el diálogo entre actores en conflicto.
- **Programa de Derechos Humanos**, que realiza un seguimiento de la coyuntura internacional en materia de derechos humanos, y en especial de aquellos ámbitos temáticos que actualmente marcan la agenda mundial, como la incidencia del terrorismo en el disfrute de todos los derechos o la responsabilidad social corporativa.
- **Programa de Educación para la Paz**, cuyo equipo promueve y desarrolla el conocimiento, los valores y las capacidades de la Educación para la Paz.
- **Programa de Música, Artes y Paz**, que se centra en la investigación de iniciativas artísticas que contribuyen a la construcción de la paz.
- **Programa de Desarme**, que trabaja diferentes temas del área del Desarme con una especial atención al microdesarme, los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de ex combatientes y el control de las exportaciones de armas.
- **Programa de conflictos y construcción de paz**, que realiza un seguimiento y análisis diario de la coyuntura internacional, en materia de conflictos armados, situaciones de tensión, crisis humanitarias, desarrollo y género, con objeto de realizar el informe anual Alerta!, informes quincenales, mensuales y trimestrales.
- **Programa de Procesos de Paz**, que realiza un seguimiento y análisis de los diferentes países con procesos de paz o negociaciones formalizadas, y de aquellos países con negociaciones en fase exploratoria. Dentro de este programa se enmarca el proyecto Colombia, dedicado a dar visibilidad a las iniciativas de paz para este país.
- **Programa de Rehabilitación Posbélica**, desde el que se lleva a cabo un seguimiento y análisis de la ayuda internacional en términos de construcción de la paz en contextos bélicos y posbélicos.

Escola de Cultura de Pau

Facultat Ciències Educació, Edifici G-6
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (España)
Tel: 93 581 24 14/ 93 581 27 52; Fax: 93 581 32 94
Email: alerta.escolapau@pangea.org
Web: www.escolapau.org

êçp escola de
cultura de pau

Edifici G-6, UAB, 08193
Bellaterra, España
Tel. 93 581 24 14
Fax 93 581 32 94
escolapau@pangea.org
www.escolapau.org